



Asamblea General

Distr. general
1 de febrero de 2018
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

37º período de sesiones

26 de febrero a 23 de marzo de 2018

Tema 4 de la agenda

Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria*

Resumen

Durante más de seis años, la Comisión ha venido documentando de manera independiente e imparcial violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las partes en el conflicto de la República Árabe Siria, que se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas. Esas violaciones han empujado a más de la mitad de la población del país a abandonar su hogar. Desde el inicio del conflicto, las partes han mostrado una absoluta indiferencia hacia los respectivos civiles que pretenden representar y hacia el derecho internacional.

El presente informe demuestra una vez más que los civiles no solo han sido víctimas involuntarias de la violencia, sino que a menudo han sido objeto de ataques deliberados con medios y métodos de combate ilícitos. Miles de personas privadas de libertad han sufrido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género. Los reiterados ataques a establecimientos médicos, escuelas y mercados han diezmado la infraestructura civil básica. La ayuda humanitaria se ha instrumentalizado como arma de guerra; el asedio y la denegación de asistencia vital se han utilizado para obligar a las comunidades civiles y a las partes en el conflicto, por igual, a rendirse o morir de hambre.

A pesar de estas numerosas violaciones, las víctimas sirias han sido objeto de una absoluta denegación de justicia. En el informe, la Comisión señala su intención de ayudar a las víctimas a obtener justicia y de perseguir ese fin enérgicamente, a la luz de la evolución de la situación sobre el terreno en la República Árabe Siria y de las diversas iniciativas que se están emprendiendo para sentar a las partes en el conflicto a la mesa de negociación. Estos acontecimientos plantean nuevos retos —pero también brindan oportunidades— en relación con el objetivo de que las víctimas puedan obtener justicia. Sin embargo, todos los actores deberán reconocer que cualquier acuerdo negociado y cualquier solución duradera para lograr la paz deberán atender las demandas de justicia y rendición de cuentas de las víctimas como componente central. Ese objetivo no puede pasarse por alto a cambio de lograr una solución política viable.

* Los anexos del presente informe se distribuyen como se recibieron, únicamente en el idioma en que fueron presentados.



Índice

	<i>Página</i>
I. Mandato y metodología.....	3
II. Observaciones preliminares	3
III. Evolución de la situación política y militar	7
IV. Caída del Estado Islámico en el Iraq y el Levante	9
A. Al-Raqa.....	9
B. Deir ez-Zor	12
V. Desplazados internos.....	14
VI. Retornados y obstáculos al retorno	15
VII. Detenidos y desaparecidos	16
VIII. La vida bajo el asedio.....	17
IX. Deterioro de la infraestructura civil.....	17
A. Hospitales	17
B. Escuelas	18
C. Mercados	18
X. Recomendaciones.....	19
 Anexos	
I. Map of the Syrian Arab Republic.....	21
II. Siege of eastern Ghutah (Rif Damascus).....	22
III. Internally displaced persons	29
IV. Erosion of civilian infrastructure.....	34

I. Mandato y metodología

1. En este informe, presentado en cumplimiento de la resolución 34/26 del Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria expone las conclusiones de las investigaciones realizadas en el país del 8 de julio de 2017 al 15 de enero de 2018¹.
2. La metodología empleada por la Comisión se basó en las mejores prácticas de las comisiones de investigación y las misiones de determinación de los hechos. Se recabó información directa mediante la realización de entrevistas con víctimas y testigos de los acontecimientos ocurridos en la República Árabe Siria.
3. En total se realizaron 513 entrevistas en persona y a distancia. La Comisión tuvo numerosas dificultades en relación con la seguridad de los entrevistados, en particular en las zonas controladas por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL). En Al-Raqa y Deir ez-Zor, muchas de las personas entrevistadas por la Comisión tenían un acceso limitado a la telefonía móvil e Internet. En todos los casos, la Comisión se guió por el principio de “no hacer daño”.
4. La Comisión recopiló, examinó y analizó imágenes tomadas por satélite, fotografías, vídeos y fichas médicas. También se consultaron comunicaciones de Estados Miembros e informes de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales.
5. Se consideró que el requisito probatorio se había cumplido cuando la Comisión obtuvo un corpus fiable de información para llegar a la conclusión de que había motivos razonables para creer que los incidentes ocurrieron tal como se describieron y que las violaciones fueron cometidas por la parte identificada.
6. Las investigaciones de la Comisión siguen estando limitadas por el hecho de que se le deniega el acceso a la República Árabe Siria.

II. Observaciones preliminares

7. Durante más de seis años, la Comisión ha venido documentando de manera independiente e imparcial violaciones graves de los derechos humanos cometidas por las partes en el conflicto de la República Árabe Siria, que se ha cobrado la vida de centenares de miles de personas y ha dejado a muchas más mutiladas o incapacitadas de por vida. Más de la mitad de la población se ha visto obligada a abandonar su hogar, y más de 13,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.
8. Lo que comenzó, en marzo de 2011, como una serie de manifestaciones pacíficas para exigir reformas a las que las fuerzas militares y de seguridad del Estado sirio respondieron con mano dura, se convirtió tristemente en un conflicto armado sin carácter internacional caracterizado por la absoluta indiferencia de las partes beligerantes hacia la vida de la población civil y el derecho internacional. Los civiles no solo han sido víctimas involuntarias de actos de violencia sin sentido, sino que a menudo han sido objeto de ataques deliberados con medios y métodos de combate ilícitos que son empleados por un número creciente de actores regionales e internacionales.
9. Diligente y meticulosamente, la Comisión ha documentado, analizado, verificado y presentado al Consejo de Derechos Humanos, al Secretario General, al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General, a los órganos regionales y a la comunidad internacional información sobre esta tragedia que se podría haber detenido. Sin embargo, la implicación de diversos actores y patrocinadores regionales e internacionales ha prolongado y agudizado el conflicto, en lugar de ponerle fin.
10. La Comisión ha venido denunciando violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han incluido detenciones arbitrarias, torturas durante la detención, desapariciones forzadas, violencia sexual y de género, ataques

¹ Los comisionados son Paulo Sérgio Pinheiro (Presidente), Karen Koning AbuZayd y Hanny Megally.

a establecimientos médicos, escuelas y mercados, ataques indiscriminados y ataques deliberados a civiles. Ninguna de las partes ha cumplido sus obligaciones, tanto en virtud del derecho internacional humanitario como del derecho de los derechos humanos, de proteger a los civiles, la infraestructura básica para la vida y los medios de subsistencia de la población civil o los lugares especialmente protegidos que constituyen la columna vertebral de sus comunidades. La ayuda humanitaria se ha instrumentalizado como arma de guerra; el asedio y la denegación de asistencia vital se han utilizado para obligar a las comunidades civiles y a las partes en el conflicto, por igual, a rendirse o morir de hambre.

11. En cuanto miembros de una comisión investigadora, las tareas principales de los comisionados han consistido en documentar todas las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra, denunciar a los responsables, procurar que los autores rindan cuentas de sus crímenes y ayudar a las víctimas a obtener justicia. Por el momento, las iniciativas emprendidas para promover la responsabilidad penal por conducto de la Corte Penal Internacional no han tenido éxito, a pesar de los notables esfuerzos del Consejo de Derechos Humanos, la Comisión, un gran número de Estados Miembros comprometidos con la promoción de la justicia internacional e innumerables grupos de la sociedad civil. Los intentos de remitir la situación de la República Árabe Siria a la Corte Penal Internacional nunca han conseguido ir más allá de la sala del Consejo de Seguridad. Tal vez se pueda avanzar más en ese sentido recurriendo a la jurisdicción universal, y acogemos con beneplácito que esté aumentando el número de causas de esa naturaleza incoadas ante diversas jurisdicciones nacionales.

12. Además, en diciembre de 2016, los Estados Miembros aprobaron la resolución 71/248 de la Asamblea General, con la que se pretende promover la responsabilidad penal de manera novedosa al establecer el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente, encargado de recabar, consolidar, preservar y analizar las pruebas de los más graves crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado en la República Árabe Siria. Esa labor tendrá como objetivo compilar expedientes de casos para facilitar los procedimientos en las jurisdicciones internacionales y nacionales que estén dispuestas a enjuiciar a los autores de los atroces crímenes que se han cometido durante la guerra de la República Árabe Siria. La Comisión acoge con beneplácito esta iniciativa como un paso hacia la promoción de la rendición de cuentas y colaborará estrechamente con el Mecanismo para ayudarlo a alcanzar ese objetivo.

13. En cuanto a la cuestión de la ayuda a las víctimas para que obtengan justicia, la Comisión tiene la intención de perseguir ese fin enérgicamente en el año venidero a la luz de la evolución de la situación sobre el terreno en la República Árabe Siria y de las diversas iniciativas que se están emprendiendo para sentar a las partes en el conflicto a la mesa de negociación. Estos acontecimientos plantean nuevos retos, pero también brindan oportunidades en relación con el objetivo de que las víctimas puedan obtener justicia. Sin embargo, todos los actores deberán reconocer que cualquier acuerdo negociado y cualquier solución de paz duradera deberán atender las demandas de justicia y rendición de cuentas de las víctimas como componente central, y que este objetivo no puede pasarse por alto a cambio de lograr una solución política.

14. La Comisión considera su obligación de dar prioridad a las necesidades y demandas de justicia del pueblo sirio, cuya población civil ha quedado atrapada o ha sido utilizada como rehén en este conflicto sin sentido y ha sufrido privaciones e injusticias atroces. En ese sentido, la Comisión procurará utilizar los conocimientos, la experiencia y los procesos de verificación que ha acumulado en los seis últimos años para ayudar a las víctimas a lograr la justicia que no han podido obtener hasta la fecha.

15. En el presente informe, la Comisión destaca la necesidad de encontrar medidas prácticas para remediar las violaciones que sigue documentando, más allá del llamado a exigir responsabilidad penal, y de buscar soluciones que puedan aplicarse en el futuro inmediato para fomentar la confianza de las partes negociadoras de una solución política o que puedan utilizarse como factores en las iniciativas de la comunidad internacional para reforzar los intentos de construir un proceso tangible de paz sostenible. En ambos casos, es imprescindible situar las necesidades de las víctimas en un lugar central de las iniciativas y negociaciones.

16. La Comisión desea recordar a las partes en el conflicto y a sus patrocinadores, a los facilitadores de las conversaciones de paz y a la comunidad internacional que cualquier proceso encaminado a poner fin al conflicto y lograr una paz sostenible debe incluir la reparación de las graves violaciones cometidas desde el comienzo del conflicto.

17. En consecuencia, la Comisión desea proponer al Consejo de Derechos Humanos los siguientes principios e iniciativas que deberán respetarse en todos los esfuerzos encaminados a poner fin al conflicto. También podrán utilizarse como puntos de referencia o recordatorios, durante el año venidero, de lo que puede ponerse en práctica inmediatamente como medidas de fomento de la confianza, lo que debe hacerse inmediatamente después de toda cesación de las hostilidades, y los mecanismos que deben establecerse para lograr avances oportunos respecto de las cuestiones apremiantes de derechos cuya resolución contribuirá a conseguir una paz sostenible:

a) Poner fin de inmediato a todos los ataques intencionados e indiscriminados contra la población civil, en particular, pero no exclusivamente, las tomas de rehenes, las desapariciones, las torturas, las ejecuciones sumarias, los actos de violencia sexual y de género y todos los castigos colectivos, en particular los asedios;

b) Permitir el acceso inmediato e incondicional a todos los lugares de detención de observadores independientes y, como mínimo, de organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja. En este contexto, poner fin a la práctica de mantener a los detenidos incomunicados o en lugares secretos de detención y proporcionar listas completas con los nombres de todas las personas privadas de libertad. De esa forma, las autoridades podrán comenzar a recopilar los nombres de las personas desaparecidas o en paradero desconocido;

c) Establecer un mecanismo, que deberá formar parte de cualquier acuerdo negociado, para permitir la rápida liberación de todos los presos políticos y las personas detenidas arbitrariamente, y comenzar ese proceso inmediatamente después de la firma del acuerdo. Entretanto, mientras prosigan las conversaciones deberá prestarse especial atención a liberar inmediatamente a los detenidos más vulnerables, como los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados. Esas acciones podrán considerarse medidas de fomento de la confianza y aplicarse a todas las partes en el conflicto;

d) Garantizar que no se indulte ni amnistíe a los responsables de ordenar o llevar a cabo violaciones manifiestas de los derechos humanos y de cometer crímenes internacionales, como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio;

e) Garantizar en todo acuerdo que la asistencia humanitaria pueda acceder y entregarse de manera inmediata y oportuna en todas las zonas afectadas por el conflicto, en estrecha colaboración con los organismos de las Naciones Unidas presentes en la República Árabe Siria;

f) Inmediatamente después de que cesen las hostilidades, facilitar el proceso de retorno en condiciones de seguridad y dignidad de los sirios desplazados y los que hayan buscado refugio fuera del país, en estrecha colaboración con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas;

g) Posibilitar la inscripción de los nacimientos y permitir a todos los afectados que adquieran o recuperen su identidad jurídica mediante mecanismos de inscripción simplificados a nivel local y comunitario, teniendo en cuenta que disponer de una identidad oficialmente reconocida, respaldada por una partida de nacimiento u otros documentos de identidad, es fundamental para hacer valer los derechos más fundamentales;

h) Garantizar el acceso y la libertad de circulación en todo el país de observadores sirios e internacionales de los derechos humanos para que puedan evaluar las condiciones, informar sobre el cumplimiento de los compromisos y contribuir al respeto de las salvaguardias y del estado de derecho.

18. Los principios enumerados no son meras aspiraciones, sino que son factibles. La Comisión ha informado reiteradamente al Consejo de Derechos Humanos sobre la red de puestos de control establecidos en las zonas controladas por el Gobierno en los que se ha

perdido el rastro de ciudadanos sirios. Se ha recurrido a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y acusaciones falsas ante tribunales militares, tribunales de campaña o tribunales antiterroristas para mantener a decenas de miles de personas detenidas, a menudo incomunicadas y en condiciones indescriptibles. A lo largo de todo el conflicto se han documentado muertes causadas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y ejecuciones sumarias en lugares de detención conocidos y secretos. Los familiares de los detenidos rara vez, por no decir nunca, reciben información sobre su paradero, las razones de su encarcelamiento o incluso su muerte. Por ello, miles de familias sirias que desconocen el paradero de algún pariente ignoran si este ha sido víctima del conflicto, se ha visto desplazado o detenido o si ha fallecido o ha sido ejecutado.

19. Los grupos armados y las organizaciones terroristas también han detenido a personas, a menudo sin otra razón o justificación que la de utilizarlas como moneda de cambio. Han tomado como rehenes a civiles, algunos de ellos con parientes en las fuerzas armadas de la República Árabe Siria, con el fin de negociar la liberación de sus compañeros de armas o sus propios parientes detenidos. Muchos de los prisioneros pertenecen a minorías religiosas y son tratados de manera espantosa, reclusos en condiciones inhumanas o sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se han utilizado procedimientos judiciales arbitrarios para justificar la ejecución sumaria de algunos detenidos sin el menor atisbo de que se observarían las debidas garantías procesales o las normas relativas a un juicio imparcial.

20. Hace mucho tiempo que las partes en el conflicto deberían haber dado prioridad a la liberación de las personas detenidas arbitrariamente. Ese ha sido un principio clave que subyace al proceso político desde el Comunicado de Ginebra de 2012². La liberación universal de las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad de todos los lugares de detención sería un punto de partida claro e inmediato que demostraría la voluntad de poner fin al conflicto. Esa decisión debería adoptarse ya, no solo en el contexto de los intercambios de prisioneros que se han venido produciendo, sino como un compromiso de todas las partes y como medida de fomento de la confianza.

21. El compromiso de permitir el acceso a todos los lugares de detención de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, en particular el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas, debe formar parte integrante de cualquier acuerdo negociado. Esa medida debería acompañarse del gesto transparente de dar a conocer el nombre de todos los civiles detenidos en todo el país y el lugar donde se encuentran.

22. Dada la magnitud del número de casos de personas desaparecidas, la creación de un mecanismo independiente e imparcial con el mandato internacional de coordinar y consolidar las denuncias, incluidas las relativas a personas sometidas a desaparición forzada, será probablemente esencial para elaborar una respuesta adecuada a los familiares de personas desaparecidas. Ese mecanismo podría encargarse de definir los principales elementos necesarios para rastrear e identificar de manera eficiente y eficaz a las personas desaparecidas, consolidar las denuncias presentadas a una amplia variedad de organizaciones no gubernamentales y humanitarias, y coordinar las gestiones con las partes en el conflicto para localizar a los desaparecidos o sus restos. Esa labor debería incorporar como componente fundamental la comunicación con los familiares de las personas desaparecidas y su participación, a fin de que se les proporcione la información pertinente en cuanto se disponga de ella.

23. También se debería dar prioridad al establecimiento de mecanismos para aliviar los elementos de la grave crisis humanitaria que afecta al país y facilitar el regreso sostenible. Para subsanar el desplazamiento de población civil más importante desde la Segunda Guerra Mundial hará falta un esfuerzo internacional concertado. En particular, se necesitará un mecanismo para garantizar el respeto de los derechos de los refugiados y desplazados internos en materia de vivienda, tierra y propiedad. El Gobierno de la República Árabe Siria debe garantizar que los cambios que se introduzcan en el ordenamiento jurídico vigente también respeten los derechos de propiedad de todos los sirios y que se deroguen sin demora las leyes cuya intención o aplicación sea discriminatoria o que violen de otro

² Véase A/66/865-S/2012/522, anexo.

modo los derechos humanos fundamentales. Será fundamental garantizar que las personas que deseen regresar y que tengan un hogar al que regresar puedan hacerlo. Si bien se trata de un proceso técnico y de larga duración, es preciso examinar cuidadosamente las leyes de bienes inmuebles vigentes en la República Árabe Siria, y toda revisión o reforma de dichas leyes debería garantizar el derecho a la propiedad, la posesión y la seguridad de la tenencia de los civiles que abandonaron su hogar bajo amenaza o por necesidad.

24. En consonancia con la práctica anterior, el presente informe se basa en más de 500 entrevistas y resume las tendencias registradas en los seis últimos meses en la República Árabe Siria, prestando especial atención a los efectos de la ofensiva contra el EIIL y el uso de la guerra de asedio contra la población civil. La Comisión propone una serie de principios e iniciativas orientados al futuro y formula recomendaciones sobre la manera de ponerlos en práctica para mejorar la situación de los civiles en el país y ayudarlos a lograr cierta apariencia de justicia.

III. Evolución de la situación política y militar

25. El conflicto sirio está entrando en su séptimo año y están apareciendo nuevas dinámicas militares y políticas. Se han llevado a cabo numerosos esfuerzos de mediación internacional en un intento de promover el diálogo entre las partes y llegar a un acuerdo político. Las recientes victorias militares de las fuerzas progubernamentales han debilitado a la oposición y han repercutido en las conversaciones de paz. Alcanzar un consenso internacional es complicado, ya que los intereses subyacentes de las partes difieren. Estas tendencias se han caracterizado recientemente por victorias militares, incluidas las del ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias contra el EIIL en Al-Raqa y Deir ez-Zor.

26. Pese a la evolución de la dinámica del conflicto en la parte oriental del país y a los crecientes niveles de violencia en Idlib y en el este de Al-Guta (Damasco Rural), el uso de acuerdos de alto el fuego ha reducido la violencia en algunos casos. El alto el fuego mediado por los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y Jordania en julio de 2017 permitió una disminución de los niveles de violencia en el sudoeste del país, particularmente en Dar'a, Quneitra y Al-Suwayda. En términos más generales, los meses de julio y agosto de 2017 se caracterizaron por los intentos rusos de alcanzar acuerdos locales de alto el fuego con grupos armados, en particular en el norte de Homs y el este de Al-Guta (Damasco Rural).

27. En el ámbito militar, el ejército sirio logró avances significativos contra el EIIL en el desierto, donde abundan los recursos petroleros, para retomar el control de Deir ez-Zor. En ese contexto, los Estados Unidos y la Federación de Rusia convinieron en una "línea de distensión" a lo largo del río Éufrates, en virtud de la cual las zonas situadas al sur del Éufrates estarían bajo el control del Gobierno, la Federación de Rusia y la República Islámica del Irán, y las zonas situadas al norte del río estarían controladas por los Estados Unidos y las Fuerzas Democráticas Sirias. Las tensiones entre el ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias por el control de los campos petroleros estratégicos de Deir ez-Zor podrían aumentar después de que el Gobierno indicara en octubre de 2017 que tenía previsto retomar el control de los recursos naturales del país.

28. En el frente septentrional, Turquía inició los preparativos de una ofensiva contra las Fuerzas Democráticas Sirias en Afrin (Alepo) e intensificó el bombardeo de artillería de las ciudades controladas por los kurdos en el norte de Siria para disminuir la influencia del Partido de la Unión Democrática. En Idlib, los grupos armados respaldados por Turquía siguieron cediendo territorio ante los avances del Gobierno, que los han dejado enclavados, divididos y marginados políticamente. El debilitamiento de esos grupos armados permitió que Hay'at Tahrir al-Sham³ se convirtiera en el actor principal en Idlib después de haber causado grandes pérdidas militares a Ahrar al-Sham. A lo largo del período que abarca el informe, Hay'at Tahrir al-Sham se esforzó por consolidar su posición en el noroeste de Siria incorporando a grupos más pequeños y afianzados localmente en las provincias de Hama e

³ Hay'at Tahrir al-Sham es una coalición que engloba distintas facciones extremistas encabezadas por el grupo terrorista Jabhat Fath al-Sham (antes Jabhat al-Nusra).

Idlib y ejerciendo por la fuerza el control sobre la administración civil de Idlib. Sin embargo, las protestas civiles generalizadas impidieron a Hay'at Tahrir al-Sham mantener el control de los principales centros urbanos.

29. A finales de agosto de 2017 también aumentaron las tensiones entre el Gobierno y el Partido de la Unión Democrática, después de que las autoridades encabezadas por kurdos anunciaran unilateralmente su intención de celebrar elecciones comunales y locales para consolidar el control administrativo de las zonas dominadas por los kurdos. El estallido de los disturbios en 2011 y la consiguiente retirada de las autoridades sirias de los territorios kurdos en 2012 permitieron al Partido de la Unión Democrática consolidar su poder y legitimar su proyecto de establecer una región autónoma *de facto*. En el ámbito militar, las fuerzas kurdas siguieron haciéndose con el control de los principales yacimientos de gas y petróleo después de lanzar una campaña militar en septiembre de 2017, con el apoyo de los Estados Unidos, para liberar Deir ez-Zor.

30. A raíz del acuerdo concertado en mayo de 2017 entre la Federación de Rusia, Turquía y la República Islámica del Irán para establecer zonas de distensión y así reducir los niveles de violencia en algunas provincias sirias, los Estados garantes se reunieron en Astana los días 14 y 15 de septiembre para celebrar una nueva ronda de conversaciones y decidir sobre la aplicación del acuerdo durante seis meses en el norte de Homs, el este de Al-Guta (Damasco Rural) e Idlib. A pesar del acuerdo, la situación en el este de Al-Guta —que es objeto de un asedio desde 2013— siguió deteriorándose a raíz de la intensificación de los ataques aéreos y las operaciones militares terrestres del ejército sirio, que reforzaron aún más el asedio y, en consecuencia, agravaron la situación humanitaria de más de 390.000 civiles sitiados. Además, las luchas internas entre los grupos armados afectaron a la población, a pesar del alto el fuego negociado entre Faylaq al-Rahman, Yaish al-Islam y la Federación de Rusia en julio y agosto.

31. A principios de octubre de 2017, las fuerzas rusas y sirias intensificaron las operaciones aéreas en Idlib y Hama después de que Hay'at Tahrir al-Sham lanzara una ofensiva contra posiciones gubernamentales en el norte de Hama. La campaña se centró en los focos de oposición que quedaban en Idlib y el nordeste de Hama, así como en la recuperación de infraestructuras estratégicas como la base aérea de Abu Duhur (véase el párr. 76). Las tropas turcas entraron simultáneamente en Idlib en el marco de una operación destinada a imponer una zona de distensión, a la vez que efectuaban bombardeos de artillería contra posiciones de Hay'at Tahrir al-Sham para apoyar el avance del Ejército Sirio Libre. En la parte central del país, tras una campaña militar de cuatro meses de duración, las Fuerzas Democráticas Sirias declararon, el 20 de octubre de 2017, que Al-Raqa había sido liberada del yugo del EIL y establecieron un consejo civil para administrar la ciudad.

32. Las campañas militares se intensificaron a lo largo de noviembre de 2017; el ejército sirio logró importantes victorias en el sur y, el 3 de noviembre, declaró que había asumido plenamente el control de la ciudad de Deir ez-Zor. En el noroeste, Hay'at Tahrir al-Sham siguió perdiendo su dominio militar tras la desertión de dos de sus principales componentes, Nur ad-Din Zangi y Yaish al-Ahrar. Las desertiones crearon hostilidades entre Hay'at Tahrir al-Sham y Nur ad-Din Zangi y desencadenaron violentos enfrentamientos en el oeste de Aleppo. En un intento de poner fin a los enfrentamientos, a mediados de noviembre ambos grupos firmaron un acuerdo que dio lugar a una cesación inmediata de las hostilidades.

33. En el ámbito diplomático, el 11 de noviembre de 2017, los Presidentes de los Estados Unidos y de la Federación de Rusia firmaron una declaración, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico celebrada en Viet Nam, en la que destacaron la necesidad de emprender un proceso de reforma constitucional y la programación de elecciones supervisadas por las Naciones Unidas en la República Árabe Siria. El 21 de noviembre, un día antes del comienzo de la cumbre tripartita turco-irano-rusa sobre la República Árabe Siria, el Presidente Putin y el Presidente Al-Assad coincidieron en que la operación militar en la República Árabe Siria estaba llegando a su fin y subrayaron la necesidad de iniciar un proceso político que incluiría un congreso de diálogo nacional sirio que se celebraría en Sochi (Federación de Rusia). Habida cuenta de las opiniones divergentes de la Federación de Rusia y los Estados Unidos

sobre el papel futuro de las tropas estadounidenses en el norte de Siria, las aspiraciones kurdas de libre determinación y los esfuerzos por alcanzar una solución política en Sochi seguirán siendo cuestiones polémicas que, sin duda, influirán en las iniciativas para lograr un consenso internacional sobre la solución política de la crisis. La Arabia Saudita también se esforzó por dar impulso al proceso de paz organizando una reunión en Riad, del 22 al 24 de noviembre, para formar una delegación conjunta que representara a diferentes facciones de la oposición siria en la próxima ronda de conversaciones de paz de Ginebra. Al final de la reunión, la oposición siria emitió la Declaración de Riad II, en la que anunció la creación de un órgano de 50 miembros para que participara en las conversaciones de Ginebra y entablara negociaciones directas con el Gobierno, sin condiciones previas.

34. El 28 de noviembre, el Enviado Especial del Secretario General para Siria, Staffan de Mistura, inauguró la octava ronda de conversaciones de paz intrasirias en Ginebra, que se centró en el proceso constitucional y la programación de elecciones supervisadas por las Naciones Unidas en el contexto de la aplicación de la resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad. La delegación del Gobierno de la República Árabe Siria postergó su viaje para tomar parte en las conversaciones a raíz de la publicación de la Declaración de Riad II, que, según el Gobierno, contiene la condición previa de que el Presidente Al-Assad abandone el país. Aunque el Enviado Especial prorrogó las conversaciones hasta el 15 de diciembre, no se logró el objetivo de celebrar conversaciones directas entre el Gobierno y la oposición.

35. El 11 de diciembre de 2017, el Presidente Putin visitó la base aérea de Humaymim (Latakia) para anunciar el retiro de una gran parte del contingente de tropas rusas a raíz de la declaración del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas de que el país había sido completamente liberado del yugo del EIIL. Los días 21 y 22 de diciembre, el Gobierno de Kazajistán acogió la octava ronda de las conversaciones de Astana, que se centró en la situación en las zonas de distensión y en la cuestión de la liberación de los detenidos. Al término de la reunión, los Estados garantes emitieron una declaración conjunta en la que anunciaron el inicio de los preparativos del Congreso de Diálogo Nacional Sirio que se celebraría en Sochi los días 29 y 30 de enero de 2018. En respuesta a dicha declaración, más de 40 grupos de la oposición pidieron que se boicoteara el congreso de Sochi, aduciendo que la Federación de Rusia estaba tratando de eludir las conversaciones intrasirias facilitadas por las Naciones Unidas en Ginebra.

IV. Caída del Estado Islámico en el Iraq y el Levante

A. Al-Raqa

36. Ya en febrero de 2012, la Comisión expresó su preocupación por el riesgo de radicalización del conflicto⁴, y desde entonces ha documentado sistemáticamente las violaciones cometidas por grupos terroristas y extremistas. Realizando ataques indiscriminados o atentados contra civiles, a menudo con trasfondos sectarios, esos grupos han sido responsables de la muerte de innumerables hombres, mujeres y niños. El 2 de octubre de 2017, el EIIL llevó a cabo un atentado suicida con explosivos en el barrio de Maydan de la ciudad de Damasco que se saldó con 17 muertos, entre ellos varios agentes de policía, y 20 heridos. Ese grupo terrorista había realizado atentados similares contra desplazados internos que huían de las batallas de Al-Raqa y Deir ez-Zor, matando e hiriendo a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños (véase el anexo III, párr. 14).

37. Desde 2013, el EIIL había dado prioridad a la construcción de un “Estado” o “califato”. Atacando a los líderes y activistas locales y explotando la fragmentación social y la situación económicamente desesperada de las comunidades, se hizo rápidamente con el control de una parte considerable del territorio del país e instaló en la ciudad de Al-Raqa su capital *de facto*. Designado como grupo terrorista por el Consejo de Seguridad, el EIIL se convirtió en sinónimo de brutalidad⁵. La Comisión ha informado sobre los actos de

⁴ Véase A/HRC/19/69, párr. 124.

⁵ Véase A/HRC/27/CRP.3.

genocidio⁶, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra⁷ que, según ha constatado, ha cometido el EIIL.

38. En noviembre de 2016, las Fuerzas Democráticas Sirias anunciaron que iban a poner en marcha la “Operación Ira del Éufrates” para capturar la provincia de Al-Raqa. Después de avanzar rápidamente por toda la provincia, en junio de 2017 las Fuerzas iniciaron la última etapa de la operación para hacerse con el control de la ciudad de Al-Raqa. Su ofensiva terrestre se llevó a cabo con un amplio apoyo aéreo de la coalición internacional⁸. Aunque a mediados de octubre las Fuerzas y la coalición internacional habían conseguido derrocar al EIIL, la batalla por la ciudad de Al-Raqa se caracterizó por las violaciones cometidas por todos los bandos y tuvo un costo altísimo para la población civil. En el punto álgido de la operación, la coalición internacional efectuó unos 150 ataques aéreos diarios que provocaron la destrucción de gran parte de la ciudad de Al-Raqa⁹ y un gran número de víctimas civiles. Intentando escapar de la violencia, unas 200.000 personas abandonaron su hogar y no tuvieron más remedio que trasladarse a los campamentos de desplazados internos administrados por las Fuerzas Democráticas Siria, donde permanecieron internadas (véase el anexo III, párrs. 12 a 18). Algunas de las pocas personas que permanecieron en la ciudad fueron utilizadas por el EIIL como escudos humanos para evitar los avances de las fuerzas enemigas.

1. Ataques aéreos de la coalición internacional

39. La noche del 20 al 21 de marzo de 2017, aproximadamente a las 23.00 horas, fuerzas de la coalición encabezada por los Estados Unidos realizaron un ataque aéreo contra la escuela Al-Badiya de Al-Mansura (Al-Raqa), en una zona que estaba bajo el control del EIIL en ese momento. La Comisión informó por primera vez de ese incidente en julio de 2017¹⁰, y sus conclusiones se detallan en el anexo IV (párrs. 7 a 11). La Comisión efectuó 20 entrevistas con supervivientes, familiares de víctimas, personas que acudieron a proporcionar primeros auxilios, residentes de la aldea e individuos que estuvieron en el lugar después del ataque aéreo, y llegó a la conclusión de que la escuela había albergado a familias desplazadas desde 2012. De los más de 200 residentes de la escuela, 150 perdieron la vida en el ataque. La Comisión identificó a 12 supervivientes, varios de los cuales habían sufrido lesiones severas como quemaduras graves y la pérdida de miembros. Entre los supervivientes había 4 mujeres y 6 niños, el más joven de los cuales era un bebé de 10 meses.

40. En una rueda de prensa celebrada el 28 de marzo de 2017, la Fuerza Conjunta Combinada establecida por la coalición internacional asumió la responsabilidad del ataque y afirmó que su objetivo eran 30 combatientes del EIIL que, según afirmó, utilizaban la escuela. La Fuerza Conjunta señaló que no podía confirmar que la escuela fuera utilizada por desplazados internos.

41. La información recopilada por la Comisión no confirma la alegación de que 30 combatientes del EIIL estaban en la escuela en el momento del ataque ni que el EIIL estuviera utilizando de algún otro modo la escuela. Más bien, los datos disponibles sobre la naturaleza de las víctimas y del edificio Al-Badiya difieren ampliamente de la evaluación realizada por la coalición internacional. El equipo de la coalición que determinó el objetivo del ataque debería haber sabido que los residentes de la escuela eran familias de desplazados internos que incluían a un gran número de mujeres y niños, y que la escuela se había utilizado para albergar a desplazados internos desde 2012. Por lo tanto, la Comisión concluye que la coalición internacional debería haber conocido la naturaleza del objetivo y

⁶ Véase A/HRC/32/CRP.2.

⁷ Véase A/HRC/27/CRP.3.

⁸ Desde 2014, una coalición internacional reúne a más de 60 países con el objetivo de combatir al EIIL por diversos medios que incluyen la realización de ataques aéreos.

⁹ Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), Programa Operacional sobre Aplicaciones de Satélite (UNOSAT), “Syria: Ar Raqqa/Ar Raqqa governorate”, análisis de imágenes tomadas el 21 de octubre de 2017, publicado el 1 de diciembre de 2017, disponible en http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Raqqa_Damage_Points_20171021.pdf.

¹⁰ Véase A/HRC/36/55, párr. 79.

no tomó todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y de heridos entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente, lo cual constituyó una violación del derecho internacional humanitario. La investigación realizada posteriormente por la coalición internacional debería haber permitido constatar el gran número de víctimas civiles causadas por este incidente.

2. Operaciones terrestres de las Fuerzas Democráticas Sirias

42. Durante el período que abarca el informe, las Fuerzas Democráticas Sirias continuaron su campaña de reclutamiento forzoso en las zonas que controla para obligar a los hombres y niños varones a participar en las operaciones militares. Los reclutas, entre los que se encuentran niños de tan solo 13 años de edad, reciben un adiestramiento básico antes de ser enviados al frente. En julio de 2017, dos muchachos de 15 y 16 años de edad se alistaron en las Fuerzas Democráticas Sirias en Al-Tabqa (Al-Raqa). El más joven de ellos fue herido posteriormente en el brazo durante el combate. En otro caso, un residente de Al-Raqa que había huido de la ciudad a mediados de julio de 2017 fue interceptado con su familia a su llegada al territorio controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias e interrogado por un adolescente kurdo uniformado. Aunque con menos frecuencia, también se ha reclutado a niñas; en octubre de 2017, las Fuerzas Democráticas Sirias reclutaron a una adolescente en Al-Raqa. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, al que la República Árabe Siria se adhirió en 2003, establece —sin reservas— en 18 años la edad mínima para la participación directa en las hostilidades, el reclutamiento en los grupos armados y el reclutamiento obligatorio en las fuerzas armadas por los Gobiernos.

43. La Comisión recibió alegaciones de que las Fuerzas Democráticas Sirias pedían a quienes regresaban a Tell Abyad (Al-Raqa) que ofrecieran voluntariamente a un hombre de cada familia para que participara en los combates, lo que, a efectos prácticos, impidió a algunas familias regresar a su hogar. Otras familias han optado por alejarse de las zonas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias para evitar las represalias por negarse al reclutamiento, que incluyen la detención. También se ha denunciado el reclutamiento forzoso de hombres en los campamentos de desplazados internos, y algunos hombres han sido detenidos por haberse negado a sumarse a las Fuerzas.

44. Se ha intimidado y detenido a periodistas y activistas por haber denunciado presuntas violaciones cometidas por las Fuerzas Democráticas Sirias y la coalición internacional en la ciudad de Al-Raqa, Tell Abyad y Al-Tabqa. En varios casos, las Fuerzas arrestaron y detuvieron durante períodos de hasta seis semanas a familiares de los activistas que buscaban para obtener información sobre el paradero de estos y presionarlos para que se entregaran. Las Fuerzas Democráticas Sirias también detuvieron a familiares de miembros del Ejército Sirio Libre y del EIL para interrogarlos. Varios de los detenidos eran mujeres y niños, entre ellos una muchacha de 16 años y un niño de 10 años. Los familiares señalaron que se les había denegado toda información sobre los detenidos, incluida la ubicación del centro de detención y el motivo de su reclusión. Según se ha informado, algunos detenidos varones recibieron golpes y quemaduras con cigarrillos, y no se les facilitaron los medicamentos que necesitaban para tratar enfermedades crónicas como la diabetes.

3. Estado Islámico en el Iraq y el Levante

45. En junio de 2017, las Fuerzas Democráticas Sirias y sus grupos afiliados, incluidos, principalmente, el Ejército Sirio Libre y elementos tribales de la provincia de Al-Raqa¹¹, cercaron y se hicieron con el control de algunas partes de la ciudad de Al-Raqa con el apoyo aéreo de la coalición internacional. Para entonces, unos 200.000 residentes habían abandonado la ciudad, pero otros 50.000 permanecieron atrapados en su interior. Mientras que la mayoría de los que podían hacerlo abandonaron la ciudad, otros no tuvieron más remedio que quedarse, como los ancianos y los enfermos. Algunos entrevistados dijeron

¹¹ Esos elementos pertenecían, principalmente, a las milicias de las Fuerzas Al-Sanadid y a Jabhat Thuwar al-Raqqah.

que habían decidido quedarse porque temían que el EIL les confiscara su casa si se marchaban. Las primeras noticias de que el EIL estaba impidiendo a los civiles marcharse se difundieron a finales de junio de 2017 y continuaron hasta el final de la ofensiva para echar al EIL de la ciudad de Al-Raqa en octubre.

46. Las dificultades que enfrentaban los civiles para huir fueron creciendo con cada avance de las Fuerzas Democráticas Sirias. Antes de junio de 2017, el EIL permitía a algunos civiles, en particular los enfermos, que se trasladaran a la parte rural de Al-Raqa que estaba bajo su control. Sin embargo, una vez que las Fuerzas Democráticas Sirias sitiaron la ciudad, el EIL puso fin a esa práctica y ordenó a los residentes del extrarradio de la ciudad que se trasladaran al centro. A principios de agosto, el EIL ordenó a una familia del barrio de Albu Saraya que se trasladara a otro edificio que fue alcanzado por un ataque aéreo dos horas después. Unos 30 civiles perdieron la vida en ese ataque. Después del sitio, los civiles también tuvieron cada vez más dificultades para escapar hacia el sur utilizando el viejo puente del río Éufrates, ya que la zona se convirtió en frente de combate y el EIL colocó minas terrestres en las áreas que iba perdiendo, obligando a muchos civiles a pagar a traficantes de personas para que los ayudaran a cruzar esas zonas.

47. El EIL utilizó diversos medios para impedir que los civiles salieran de la ciudad de Al-Raqa, como ordenarles que abandonaran los barrios cuyo control había perdido a manos de las Fuerzas Democráticas Sirias, así como el uso de francotiradores y minas terrestres. En un caso del que se ha informado, una familia ampliada de más de 20 personas abandonaba la ciudad a mediados de julio, después de que las Fuerzas Democráticas Sirias se acercaran a su barrio, pero el EIL les ordenó que se trasladaran a una zona del oeste de la ciudad que seguía bajo su control. Cuando la familia trató de escapar por la noche utilizando el viejo puente, fue atacada por francotiradores del EIL. Afortunadamente, nadie resultó herido. Otro grupo que utilizaba la misma ruta a principios de agosto recibió disparos de francotiradores del EIL y cuatro personas, entre ellas dos mujeres y una niña discapacitada de 11 años, resultaron muertas por la explosión de una mina terrestre.

48. Las órdenes a los civiles de que se trasladaran a las zonas que controlaba y las medidas para impedir que se marcharan mediante el uso de francotiradores y la colocación de minas terrestres fueron un intento del EIL de proteger la ciudad de Al-Raqa de nuevos ataques utilizando a la población civil como escudo humano. Colocando deliberadamente a civiles en zonas donde estaban expuestos a operaciones de combate, con el fin de impedir que esas zonas fueran atacadas, los militantes del EIL cometieron el crimen de guerra de utilizar escudos humanos en la provincia de Al-Raqa¹². Además, los entrevistados recordaron que, de acuerdo con su doctrina, el EIL consideraba a quienes intentaban abandonar la ciudad de Al-Raqa como apóstatas que se marchaban de *dar al-Islam* (el territorio del islam) a *dar al-harb* (el territorio de la guerra), por lo que estimaba que tenía derecho a atacarlos.

49. A pesar de que se estaba utilizando a civiles como escudos humanos, los ataques aéreos diarios de la coalición internacional continuaron a un ritmo incesante, provocando la destrucción de gran parte de la ciudad de Al-Raqa y la muerte de innumerables civiles, muchos de los cuales fueron enterrados en cementerios improvisados en parques y otros lugares. Algunos de los entrevistados dijeron que habían tratado de recuperar cadáveres bajo los escombros, pero en muchas ocasiones no pudieron hacerlo por falta de maquinaria pesada. A medida que aumentaba el número de víctimas mortales, diversos organismos internacionales expresaron su preocupación por el riesgo que representaban los cadáveres para la salud pública, en particular por la propagación de enfermedades.

B. Deir ez-Zor

50. Al igual que en Al-Raqa, las operaciones militares que pusieron fin al control que ejercían los militantes del EIL en Deir ez-Zor se caracterizaron por ataques aéreos

¹² Véase, por ejemplo, Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, *Prosecutor v. Radovan Karadžić*, causa núm. IT-95-5/18-T, fallo de 24 de marzo de 2016 (cuatro volúmenes), pág. 199, párr. 525.

concertados, realizados principalmente por fuerzas progubernamentales, que no hicieron sino agravar el sufrimiento de los miles de civiles que habían vivido bajo el yugo del EIIL durante más de tres años. En junio de 2014, militantes del EIIL cercaron barrios de la ciudad de Deir ez-Zor controlados por el Gobierno y denegaron el acceso comercial y humanitario a la población sitiada. El 22 de agosto, fuerzas progubernamentales lanzaron oficialmente una ofensiva para recuperar Deir ez-Zor, y el 5 de septiembre rompieron el cerco establecido por el EIIL durante tres años alrededor de las partes citadas de la ciudad de Deir ez-Zor¹³.

51. Tras dos meses de enfrentamientos, el Ministerio de Defensa sirio anunció que las fuerzas gubernamentales se habían hecho con el control de toda la ciudad. El 6 de diciembre de 2017, la televisión estatal siria proclamó que la provincia de Deir ez-Zor había sido liberada del yugo del EIIL. Ese mismo día, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas anunció también que las fuerzas rusas se habían apoderado de la ciudad de Deir ez-Zor el 3 de noviembre. A pesar de esas proclamaciones, las operaciones aéreas progubernamentales contra los blancos restantes del EIIL parecieron continuar, sobre todo en ciertas franjas de terreno desértico.

52. Los civiles que lograron huir de Deir ez-Zor recordaron el grado de destrucción que habían presenciado; la mayoría de ellos señaló sistemáticamente que alrededor del 80% de la ciudad había resultado gravemente dañada por los ataques aéreos¹⁴. Numerosos testigos indicaron que las fuerzas progubernamentales no hacían distinción alguna entre objetivos militares o civiles y que cientos de civiles habían perecido en los ataques aéreos efectuados contra zonas residenciales.

53. Antes de septiembre de 2017, los militantes del EIIL impedían activamente que la población civil abandonara Deir ez-Zor mediante patrullas callejeras que operaban sobre todo por la noche. Todo civil que intentara salir de Deir ez-Zor era aprehendido y trasladado al puesto de la *hisbah* (policía del EIIL) más cercano, donde se le imponía una multa por desobediencia o se le aplicaba un castigo corporal de azotes. Después de septiembre, cuando los ataques aéreos se intensificaron notablemente y el EIIL comenzó a perder el control de la población, el caos resultante hizo inviables las patrullas de la *hisbah* y el EIIL recurrió al uso de puestos de control. Al igual que en Al-Raqa, el EIIL puso deliberadamente a la población en peligro para proteger las zonas de los ataques, lo que equivale al crimen de guerra de utilizar escudos humanos.

54. Incapaz de hacer frente a la gran ofensiva en su contra, en septiembre de 2017 el EIIL inició una campaña de reclutamiento forzoso emitiendo un decreto que ordenaba el reclutamiento obligatorio de todos los hombres de entre 20 y 30 años de edad. Para aplicar el decreto se establecieron puestos de control tanto en la ciudad como en el campo. Se detenían y registraban los autobuses y taxis, y los pasajeros varones eran obligados a asistir a clases de arrepentimiento religioso (*istitabah*) y, posteriormente, a recibir adiestramiento militar. Después de unos meses, los hombres eran enviados directamente al frente.

55. En septiembre, cuando el EIIL perdió el control de la población, decenas de miles de civiles se dirigieron al norte, hacia las zonas controladas por los kurdos (véase el anexo III). Sin embargo, otros cientos de ellos intentaron cruzar el río Éufrates en transbordadores utilizados anteriormente para transportar mercancías, vehículos y ganado. Los días 11 y 12 de septiembre, fuerzas progubernamentales atacaron transbordadores que cruzaban el Éufrates en Jarita. El 11 de septiembre, aproximadamente a las 10.30 horas, entre 40 y 50 personas se encontraban a bordo del transbordador Kharita cuando fuerzas progubernamentales lanzaron un ataque aéreo. Un total de 30 civiles murieron, muchos de ellos ahogados. Los testigos sostuvieron que a bordo del transbordador no había ningún militante del EIIL.

¹³ Véase, por ejemplo, A/HRC/31/68, párrs. 127 a 129, respecto del sitio de Deir ez-Zor por el EIIL.

¹⁴ UNITAR, UNOSAT, “Syria: Deir Ez Zor, Deir Ez Zor governorate”, análisis de imágenes tomadas el 9 de noviembre de 2017, publicado el 21 de noviembre de 2017, disponible en http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Deir_Ez_Zor_Damage_Points_20171109_Optimized.pdf.

56. Asimismo, los días 9 y 10 de septiembre, en el punto de paso de Al-Bulil, fuerzas progubernamentales lanzaron ataques aéreos contra transbordadores que se disponían a cruzar el Éufrates. El 9 de septiembre, aproximadamente a las 11.00 horas, se produjo un ataque aéreo contra el punto de paso de Shamia al-Yazira, donde un grupo de civiles que intentaban huir se encontraban a la espera de poder cruzar. En el ataque murieron al menos 32 civiles, entre ellos mujeres y niños. Las fotos de los restos proporcionadas por los entrevistados mostraron que se habían utilizado bombas en racimo RBK-250 y RBK-500. El uso de municiones en racimo en zonas civiles pobladas es intrínsecamente indiscriminado (dado su patrón de dispersión habitualmente amplio y su alta tasa de fallo, como consecuencia de la cual la población civil sigue estando en peligro años después de que cesen las hostilidades). Por lo tanto, dichas municiones están prohibidas por el derecho internacional humanitario consuetudinario. Su utilización por las fuerzas progubernamentales en la ciudad de Deir ez-Zor constituye el crimen de guerra de realizar ataques indiscriminados en una zona civil poblada.

V. Desplazados internos

57. Al menos 6,5 millones de sirios se han visto obligados a desplazarse dentro de la República Árabe Siria como consecuencia de las hostilidades; de ellos, casi 3 millones son niños. Mucho más de 1 millón de civiles sirios resultaron desplazados en 2017. El desplazamiento adopta muchas formas. En algunos casos, las fuerzas progubernamentales han realizado ataques reiterados contra infraestructuras civiles de zonas asediadas que han provocado el desplazamiento de los civiles que lograron huir; en otros casos, miles de civiles se han visto obligados a desplazarse en el marco de la reconciliación, que a menudo da lugar a treguas locales y acuerdos de evacuación¹⁵.

58. Muchos civiles que fueron desplazados por la fuerza de las zonas controladas por la oposición acabaron alojados en escuelas de Idlib que no estaban preparados para recibirlos. Otros no tuvieron más remedio que residir en campamentos superpoblados o en ciudades desconocidas, donde carecían de recursos básicos. En Idlib y las zonas rurales vecinas de Aleppo, los desplazados internos son objeto de bombardeos prácticamente constantes (véanse los párrs. 77 a 79) y no reciben suficiente ayuda humanitaria. De conformidad con los acuerdos de evacuación, las fuerzas progubernamentales han trasladado a las poblaciones afines al Gobierno a las zonas que controlan en las provincias de Homs, Tartús y Latakia, donde las condiciones son notablemente mejores.

59. En otras situaciones, la población civil se ha visto obligada a desplazarse como consecuencia de las hostilidades o ha huido antes de los enfrentamientos. Las operaciones contra el EIIL en Al-Raqa y Deir ez-Zor desencadenaron una de las mayores oleadas de desplazados internos desde 2011. En junio de 2017, decenas de miles de sirios de Al-Raqa y Deir ez-Zor habían emprendido peligrosos viajes para escapar, cruzando el frente y arriesgándose a ser víctimas de minas terrestres, y trasladarse a los campamentos administrados por las Fuerzas Democráticas Sirias en zonas desérticas de las provincias septentrionales de Al-Raqa y Al-Hasaka. El número total de personas que huyeron de Al-Raqa y Deir ez-Zor asciende a 320.000. En el norte de Al-Raqa y Al-Hasaka, las Fuerzas Democráticas Sirias han internado a 80.000 desplazados internos a fin de comprobar si tienen conexiones con el EIIL. Independientemente de que exista o no una amenaza legítima a la seguridad, el internamiento general de todos los desplazados internos de Al-Raqa y Deir ez-Zor por las Fuerzas Democráticas Sirias no puede justificarse. Entre los civiles actualmente internados se encuentran mujeres, niños, ancianos, enfermos, discapacitados y otras personas que no representan ninguna amenaza imperiosa para la seguridad y cuya detención es manifiestamente innecesaria por el motivo que sea. En muchos casos, esas medidas de internamiento aún vigentes constituyen una privación arbitraria de libertad y una detención ilegal de miles de personas.

¹⁵ La Comisión ha documentado anteriormente el desplazamiento forzoso de civiles por las fuerzas gubernamentales del este de la ciudad de Aleppo (véase A/HRC/34/64, párr. 93), Madaya (Damasco Rural), Barza, Tishrin y Qabun (Damasco oriental) (véase A/HRC/36/55, párr. 35) a la provincia de Idlib.

VI. Retornados y obstáculos al retorno

60. Además de la precaria situación en que se encuentran quienes se han desplazado dentro del país, hasta 600.000 sirios han regresado del extranjero y también son desplazados internos porque no han podido regresar a su hogar. En toda la ciudad de Al-Raqa, las trampas explosivas y las minas terrestres colocadas por el EIL y los restos explosivos de los ataques aéreos hacen inviable el retorno de la población civil. Ninguno de los civiles que fueron desplazados por la fuerza a Idlib en virtud de las treguas locales y los acuerdos de evacuación ha regresado a su hogar.

61. Muchos desplazados internos tuvieron que desplazarse varias veces como consecuencia del conflicto o de las dificultades relacionadas con la seguridad de la tenencia y el aumento de los precios de los alimentos y la vivienda en sus lugares de desplazamiento. Además de los miles de personas que resultaron desplazadas internamente a causa de las hostilidades en Al-Raqa y Deir ez-Zor, un gran número de personas anteriormente desplazadas que se encontraban en Idlib tuvieron que volver a desplazarse en noviembre y diciembre de 2017. Las oleadas de desplazamiento imponen limitaciones a las comunidades de acogida, pues la demanda aumenta los precios de los alquileres y los productos básicos, pero las oportunidades de empleo no dejan de ser escasas. Las personas desplazadas, en particular las familias encabezadas por una mujer, sufren de manera desproporcionada para acceder a los derechos básicos, incluido el derecho a una vivienda adecuada.

62. Los riesgos asociados con el conflicto, que incluyen la probabilidad de ser objeto de violencia, discriminación o detención, constituyen obstáculos que impiden a determinadas comunidades regresar inmediatamente a su lugar de origen. Además, la ingente destrucción y contaminación causada por los restos explosivos de guerra en todo el país es un obstáculo a largo plazo que requerirá una gran cantidad de recursos y voluntad política para despejar y asegurar las zonas contaminadas, reconstruir las viviendas e infraestructuras y restaurar el fragmentado tejido social de las comunidades sirias.

63. En este contexto, la Comisión sigue recibiendo información de cambios efectivos y propuestos en el marco legislativo relacionado con los derechos de vivienda, tierra y propiedad que pueden limitar gravemente la capacidad de los desplazados internos y los refugiados para regresar a su hogar. Por ejemplo, la Ley núm. 33 de 2017, que fue aprobada por decreto presidencial el 26 de octubre de 2017, establece criterios detallados para la identificación y la reconstitución administrativa y legal de los títulos de propiedad de bienes inmuebles perdidos o parcialmente dañados¹⁶. Aunque las disposiciones de la Ley, en particular sus procedimientos de notificación, parecen respetar el derecho a un juicio imparcial, no parece que se trate en ella la situación de los desplazados internos ni se prevea enviarles una notificación en caso de que sean parte interesada en las decisiones de reconstituir sus títulos, ya sea por vía administrativa o judicial.

64. También se están examinando otras leyes que pueden repercutir en la capacidad de los desplazados internos para acceder a sus bienes. Por ejemplo, según se ha informado, un proyecto de ley reciente del Parlamento sirio que obligaría a pagar 8.000 dólares de los Estados Unidos a quien desee eludir el servicio militar e impondría multas a quienes no se incorporen a filas o no paguen dicha cantidad, también prevé la posibilidad de que el Gobierno confisque bienes muebles e inmuebles a los infractores¹⁷. Aunque el proyecto de ley no se había promulgado oficialmente en el momento en que se redactó el presente informe, los entrevistados señalaron que había entrado oficiosamente en vigor y destacaron las dificultades con que tropezaban los desplazados internos para acceder a información jurídica fidedigna sobre las cuestiones relativas a los derechos de propiedad, lo que representa otro obstáculo a su derecho a regresar a su lugar de origen.

¹⁶ Véase www.sana.sy/?p=649244, "A law regulating the reconstitution of a lost or damaged real estate document", 26 de octubre de 2017.

¹⁷ Véase www.sana.sy/?p=656572, "The People's Assembly approves a draft law concerning those who have passed the mandatory age for compulsory service and another on linking the public register of workers in the State with the Ministry of Administrative Development", 8 de noviembre de 2017.

VII. Detenidos y desaparecidos

65. En toda la República Árabe Siria, la población civil siguió siendo objeto de detenciones arbitrarias, torturas y reclusión en condiciones inhumanas. Todas las partes en el conflicto denegaron sistemáticamente a los detenidos las debidas garantías procesales y su derecho a un juicio imparcial. Detenidos que habían sido liberados en 2017 tras permanecer en centros de reclusión del Gobierno, incluidos los administrados por los departamentos de seguridad política de Aleppo y Damasco, describieron que los habían golpeado durante su interrogatorio para obtener de ellos información o para obligarlos a confesar¹⁸. El hacinamiento en las celdas, la falta de saneamiento adecuado y las infestaciones de piojos causaron diversas dolencias, en particular la propagación de infecciones cutáneas. En muchos casos se liberó a detenidos después de que su familia pagara un soborno a los funcionarios.

66. En las provincias de Al-Raqa, Deir ez-Zor y Hama, el EIIL recluyó a los civiles que acusaba de violar sus normas o que consideraba sospechosos de cooperar con las fuerzas enemigas, a los miembros de los grupos religiosos minoritarios y a los periodistas y activistas que acusaba de denunciar las presuntas violaciones cometidas por el grupo. A finales de julio de 2017, el EIIL detuvo y golpeó a un joven en el sur de la provincia de Deir ez-Zor por poseer cables para acceder a Internet y lo acusó de prestar asistencia a las fuerzas gubernamentales. En otro incidente, a mediados de octubre, el grupo detuvo a unos 40 miembros de la comunidad drusa en la campiña de Hama, continuando así su práctica de detener arbitrariamente a las minorías religiosas.

67. Algunos grupos armados antigubernamentales utilizaron centros de detención improvisados en las zonas que controlaban para retener en ellos a civiles. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2017, Nur ad-Din Zangi detuvo a tres civiles, entre ellos un miembro de la Dirección de Educación Gratuita, en Darat Izza (Alepo). Las detenciones se realizaron durante los enfrentamientos con Hay'at Tahrir al-Sham en la provincia de Alepo. Durante el mes que permanecieron recluidos, al menos dos de los detenidos fueron golpeados, recluidos en régimen de incomunicación y obligados a firmar una confesión con sus huellas dactilares. Dos de los detenidos fueron puestos en libertad tras comparecer ante un juez "militar" del grupo armado.

68. Las Fuerzas Democráticas Sirias afirmaron que en el curso de las operaciones en Al-Raqa y Deir ez-Zor habían detenido a 1.397 combatientes "terroristas", la mayoría de los cuales eran o habían sido miembros del EIIL, incluidos centenares de combatientes extranjeros de hasta 30 países¹⁹. También habían recluido a mujeres y niños vinculados con el EIIL. Las Fuerzas Democráticas Sirias han indicado que, aunque están tratando de devolver a los combatientes, cónyuges y niños extranjeros a sus países de origen, hasta ahora esos Estados se han negado a repatriar a sus nacionales, lo que los deja en un limbo jurídico y administrativo. Los ciudadanos sirios recluidos por ser combatientes del EIIL serán supuestamente "juzgados" por "tribunales" afiliados a las Fuerzas Democráticas Sirias.

69. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario imponen obligaciones claras a los Estados y a todas las partes en un conflicto que no sea de índole internacional en relación con el trato y la protección de las personas que se encuentren bajo su custodia. Independientemente de la legalidad de su reclusión, los detenidos tienen derecho a unas condiciones de detención que respeten su dignidad inherente en virtud del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, así como del derecho internacional humanitario consuetudinario.

¹⁸ Véase también A/HRC/31/CRP.1.

¹⁹ Véase People's Defense Units, "2017 Balance sheet of war – Syrian Democratic Forces", comunicado de prensa, 3 de enero de 2018, disponible en www.ypgrojava.org/2017-Balance-Sheet-of-War-%E2%80%93-Syrian-Democratic-Forces.

VIII. La vida bajo el asedio

70. En los cinco últimos años, el uso de la guerra de asedio ha afectado a la población civil más que ninguna otra táctica empleada por las partes beligerantes, y se ha caracterizado sistemáticamente por la denegación de los derechos a la libertad de circulación, la alimentación, el agua, la educación, la atención sanitaria y el derecho a la vida. El asedio más devastador fue el del este de Aleppo, que fue impuesto por las fuerzas progubernamentales entre julio y diciembre de 2016²⁰. Cerca de 420.000 civiles sirios permanecen confinados en localidades sitiadas y el 90% de ellos subsisten actualmente en circunstancias calamitosas en el este de Al-Guta (Damasco Rural). Otros 2,9 millones de sirios viven en zonas de difícil acceso para los agentes humanitarios. Las fuerzas progubernamentales, los grupos armados y las organizaciones terroristas han denegado sistemáticamente la entrega de alimentos, medicamentos y otras provisiones esenciales a las poblaciones civiles asediadas en un intento de obligar a los grupos armados que las gobiernan a rendirse. Como señaló la Comisión en enero de 2016²¹, las fuerzas del Gobierno utilizaron la inanición como arma de guerra en el sitio de Madaya (Damasco Rural), lo cual constituye un crimen de guerra²². La inanición ha provocado una situación de malnutrición aguda grave y ha tenido efectos especialmente perjudiciales en las mujeres embarazadas y los niños. La malnutrición se ve exacerbada por la denegación sistemática de las evacuaciones médicas.

71. El asedio prolongado del este de Al-Guta (véase el anexo II) está entrando ahora en su quinto año. Al igual que el del este de la ciudad de Aleppo, el asedio del este de Al-Guta por las fuerzas progubernamentales se ha caracterizado por la falta de acceso a alimentos suficientes, la llegada escasa de ayuda humanitaria y la denegación de las evacuaciones médicas. La Comisión ha documentado el uso de armas químicas y municiones en racimo prohibidas en zonas densamente pobladas y ataques contra bienes de carácter civil y bienes protegidos, como escuelas y hospitales. A pesar de ser bienes protegidos, los hospitales de las zonas asediadas tienen grandes dificultades para mantener su actividad en instalaciones dañadas que han sido objeto de reiterados ataques²³, y a menudo sin el equipo y los medicamentos más básicos que se les ha impedido recibir. Temiendo los bombardeos de los hospitales, muchas mujeres embarazadas han optado por dar a luz en casa sin asistencia médica. El Consejo de Seguridad, en sus resoluciones 2165 (2014), 2191 (2014) y 2258 (2015), autorizó la entrega incondicional de suministros humanitarios, incluidos los de asistencia médica, a las comunidades asediadas y de difícil acceso de todo el país. No obstante, el brutal asedio del este de Al-Guta y las zonas circundantes de Damasco perdura.

IX. Deterioro de la infraestructura civil

72. Desde el inicio, los ataques realizados por todas las partes contra bienes de carácter civil y bienes protegidos han sido una escandalosa característica del conflicto sirio, en contravención del derecho internacional humanitario. Hospitales, lugares de culto, centros de protección civil, zonas residenciales densamente pobladas, hogares, panaderías, mercados y, en menor medida, escuelas han resultado arrasados a causa de ataques indiscriminados o, con mayor frecuencia, han sido blancos deliberados de ataques. En todo el país, los niños son desproporcionadamente vulnerables a la violencia y los abusos, y se les sigue denegando la protección a la que tienen derecho en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Siria es parte.

A. Hospitales

73. Los ataques más evidentes contra bienes de carácter civil y bienes protegidos han sido los realizados contra hospitales e instalaciones médicas en las zonas controladas por la

²⁰ Véase A/HRC/34/64.

²¹ Véase A/HRC/31/68, párr. 120.

²² Véase Comité Internacional de la Cruz Roja, norma 156.

²³ Véase A/HRC/34/64, párrs. 30 a 40.

oposición, incluidas las asediadas por las fuerzas progubernamentales. La frecuencia de esos ataques aumentó notablemente a partir de octubre de 2015. En los dos últimos años, numerosos hospitales e instalaciones médicas han realizado sus actividades en sótanos reforzados o cuevas excavadas en las montañas, con el objetivo de protegerse de los ataques. Por temor a ser atacados, los administradores sanitarios han dejado de utilizar un emblema distintivo, contrariamente a lo que suele exigir el derecho internacional humanitario.

74. El derecho internacional humanitario reserva una protección especial a los hospitales, los centros médicos y el personal sanitario debido a su función específicamente humanitaria. Las partes en un conflicto deben adoptar medidas adicionales y específicas antes de atacar esos objetivos. Sin embargo, no hay constancia de ningún caso en que las fuerzas progubernamentales o los grupos armados advirtieran antes de atacar hospitales, establecimientos médicos o centros de protección civil. Esa falta de advertencia y la ausencia de objetivos militares dentro o cerca de los hospitales demuestran que las fuerzas progubernamentales atacan deliberadamente las infraestructuras médicas y que esta táctica forma parte de su estrategia bélica, lo que constituye el crimen de guerra de atacar intencionadamente bienes protegidos. Además, los ataques deliberados a ambulancias y personal sanitario constituyen los crímenes de guerra de realizar ataques intencionados contra transportes sanitarios y personal médico.

75. Durante el período que abarca este informe, la Comisión documentó la continuación de los ataques deliberados de las fuerzas progubernamentales contra hospitales de Idlib (véase el anexo IV, párrs. 2 a 6), Hama (véase el anexo III, párr. 21) y el este de Al-Guta (véase el anexo II, párrs. 25 a 28).

B. Escuelas

76. Entre septiembre y diciembre de 2017, mientras las fuerzas terrestres del Gobierno procedentes de Alepo y Hama avanzaban hacia Idlib desde el norte, el este y el sur, las fuerzas progubernamentales lanzaron simultáneamente una serie de ataques aéreos contra al menos siete escuelas en la campiña de Alepo que limita con Idlib. Todos los ataques menos uno se llevaron a cabo cuando no había niños en los establecimientos, lo que pone de manifiesto una estrategia destinada a diezmar las estructuras y reducir al mínimo las víctimas civiles. Las escuelas afectadas se encontraban en una zona militarmente estratégica que llevaba a la base aérea de Abu al-Duhur y a la línea de ferrocarril Alepo-Damascos. Tras dos años de asedio, los miembros de Jabhat al-Nusra y sus afiliados arrebataron la base aérea de Abu al-Duhur a las fuerzas gubernamentales en septiembre de 2015²⁴. En el anexo IV, párrafos 7 a 18, figura información detallada sobre los ataques realizados contra escuelas de Alepo. La Comisión también ha documentado ataques a escuelas en el contexto del asedio del este de Al-Guta por parte de las fuerzas progubernamentales (véase el anexo II, párrs. 20 a 23).

C. Mercados

77. Durante el período que abarca el presente informe prosiguió la pauta de realizar ataques contra mercados abarrotados²⁵. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 2017, minutos después de las 14.00 horas, se lanzó una serie de ataques aéreos contra el mercado principal de Atarib (Alepo), así como contra casas de los alrededores y la comisaría de policía del Ejército Sirio Libre. Los ataques aéreos causaron la muerte de al menos 84 personas, entre ellas 6 mujeres y 5 niños, e hirieron a otras 150, aproximadamente. El lugar atacado se encontraba en una zona densamente poblada por civiles. Además de comercios, restaurantes, oficinas y viviendas, en las cercanías se encontraban también dos escuelas (véase más información en el anexo IV, párrs. 19 a 31).

²⁴ Véase A/HRC/31/68, párr. 107.

²⁵ Véase A/HRC/28/69, anexo II, párrs. 2 a 8; A/HRC/30/48, párrs. 34 y 35; y A/HRC/31/68, párr. 77.

78. La información disponible indica que los ataques fueron efectuados por un avión ruso que utilizó armas no guiadas, entre ellas armas termobáricas. El uso de ese tipo de armas en una zona densamente poblada por civiles no podía sino afectar en gran medida a la población civil. Algunos entrevistados afirmaron que se habían producido luchas internas entre Hay'at Tahrir al-Sham y Nur ad-Din Zangi en el oeste de la provincia de Aleppo. La Comisión también recibió información contradictoria sobre un posible objetivo.

79. Todas las partes en un conflicto deben distinguir entre los objetivos militares legítimos, por una parte, y los civiles y los bienes de carácter civil, por otra, y utilizar métodos o medios de combate que estén dirigidos a un objetivo militar específico. No hay indicios de que el ataque mencionado tuviera como blanco deliberado a la población civil o al mercado de Atarib. Sin embargo, el uso de bombas no guiadas, algunas de las cuales eran armas termobáricas, en una zona densamente poblada por civiles puede equivaler al crimen de guerra de realizar ataques indiscriminados que causen muertos y heridos en la población civil.

X. Recomendaciones

80. Además de las recomendaciones que figuran a continuación, la Comisión reitera las recomendaciones que formuló en sus informes anteriores.

81. La Comisión recomienda a las partes en el conflicto que, tanto en sus operaciones militares como en calidad de partes negociadoras:

a) Pongan fin a las violaciones contra la población civil, incluidas las ejecuciones sumarias, las tomas de rehenes, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas y los actos de violencia sexual y de género;

b) Divulguen la ubicación de todos los lugares de detención, ya sean oficiales, secretos o improvisados, y proporcionen listas completas en las que se identifique a todos los detenidos;

c) Permitan el acceso incondicional a todos los lugares de detención de observadores independientes y, como mínimo, de organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja;

d) Liberen a los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados de todos los centros de detención, tal como pidió el Enviado Especial para Siria;

e) En cualquier acuerdo negociado al que lleguen, establezcan un mecanismo para permitir la rápida liberación de todos los presos políticos y las demás personas detenidas arbitrariamente;

f) Se aseguren de que los autores de crímenes rindan cuentas de sus actos y de que toda solución definitiva al conflicto no incluya ninguna amnistía para los autores de violaciones manifiestas de los derechos humanos o de actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad;

g) Pongan fin a las tácticas de asedio para permitir el acceso y la entrega inmediatos y oportunos de asistencia humanitaria en todas las zonas afectadas por el conflicto;

h) Velen por que se respete y facilite plenamente el derecho al regreso garantizando que todo regreso al lugar de origen se realice de manera voluntaria y con un consentimiento previo informado, y protejan todos los derechos de propiedad o tenencia.

82. La Comisión recomienda a la comunidad internacional que:

a) Apoye la creación de un mecanismo independiente con el mandato internacional de coordinar y consolidar las denuncias relativas a personas desaparecidas, incluidas las sometidas a desaparición forzada;

b) Se asegure de que los organismos de las Naciones Unidas y los Estados Miembros y las organizaciones regionales que son donantes principales condicionen la

provisión y facilitación de financiamiento y asistencia para la reconstrucción al cumplimiento de parámetros de referencia en materia de rendición de cuentas y protección de los derechos humanos.

83. La Comisión recomienda a la coalición internacional que:

a) Tome todas las precauciones posibles para reducir al mínimo los daños a la población civil, en particular revisando todas las directrices tácticas relacionadas con la selección de los objetivos de las operaciones aéreas;

b) Investigue más a fondo las alegaciones de ataques aéreos con víctimas civiles, en particular entrevistando a testigos, y publique sus conclusiones.

84. La Comisión recomienda a las fuerzas progubernamentales que:

a) Dejen de utilizar armas no guiadas y armas con efectos de gran alcance, incluidas las municiones en racimo y las armas termobáricas, en zonas densamente pobladas por civiles.

Anexos

Anexo I

[Inglés únicamente]

Map of the Syrian Arab Republic



Anexo II

Siege of eastern Ghutah (Rif Damascus)

I. Evolution of the siege

1. Situated just northeast of Damascus, the rural enclave of eastern Ghutah is administratively part of the Rif Damascus governorate. It had originally been heavily forested, though with the expansion of Damascus, many neighbouring areas, particularly those in the north, were steadily cleared for development. Over the past 50 or so years, due to rising housing costs in Damascus, many people began relocating to villages on the outskirts of Damascus city. As a result, eastern Ghutah eventually became an extension of a greater Damascus. Of the cities in eastern Ghutah, Douma was the largest prior to the 2011 uprising, with a population of 600,000, and, at the time, the seventh largest city in the country. The total population of eastern Ghutah prior to the uprising was 1.5 million individuals. According to the most recent census conducted by the civilian local council in eastern Ghutah, around 390,000 individuals currently subsist in the enclave, comprising less than 70,000 families, with just shy of 100,000 of them internally displaced persons. Over 90 per cent of all besieged Syrian men, women, and children currently reside in eastern Ghutah.

2. Government forces initially laid siege to the opposition-held enclave in April 2013, where after soldiers at checkpoints began imposing stringent restrictions on the entry of humanitarian aid, including by impeding the delivery of food and vital medicine. On some occasions, soldiers demanded bribes to grant entry of even the most basic commodities. For the vast majority of the duration of siege, checkpoints served as opportunities for extortion, with pro-Government forces and armed groups both profiting off the desperation of the confined population.

3. Since 2013, inhabitants of eastern Ghutah have been incinerating plastic to generate electricity, when all fuel products coming from Government-held areas ceased. The process was completed by burning the plastic down, distilling and filtering it, and producing kerosene, benzene, and diesel. Civilians further produced natural gas by digging holes, filling them with animal waste, and covering them with plastic. By early 2015, Government forces had cut access to water in Douma. Besieged civilians began digging underground wells. Some 600 wells were dug and manual pumps installed to supply neighbourhoods with water. Children created seesaws on some pumps and played on them, in order to also pump water.

4. Between July 2014 and February 2017, residents of eastern Ghutah primarily relied on an elaborate network of manmade tunnels to smuggle in food and medicine, which helped to alleviate their suffering. Owing to bribery, food and commodities were also occasionally smuggled inside the besieged area through formal routes and sold in local markets at elevated prices. Many of those tunnels were *de facto* closed by pro-Government forces in February 2017 upon their recapturing of large swathes of municipalities in the eastern Damascus area (*e.g.*, Barza, Tishreen, and Qabun), and further closed as part of a local truce implemented between pro-Government forces and opposition groups in Qabun that May (see A/HRC/36/55, annex III, para. 6).

5. Since May 2017, the official closing of tunnels in eastern Ghutah has compounded the effects of the siege to unparalleled levels. International organisations including the United Nations have to seek and obtain Government permission prior to aid deliveries, efforts which are routinely denied. Aid deliveries on 30 October and 12 November were wholly insufficient. Supplies on 30 October, for example, were only granted for 40,000 individuals in the towns of Kafr Batna and Saqba. In December, pro-Government forces did not allow any humanitarian aid into eastern Ghutah. Over the preceding months, aid reached only ten or maximum 20 per cent of people in besieged areas countrywide. Though

intended to be de-escalation zone, aid deliveries into eastern Ghutah have been denied by pro-Government forces more often over the reporting period than in 2016.

6. Eastern Ghutah is currently under the primary control of two armed groups, namely Jaysh al-Islam (the Islam Army) and Faylaq ar-Rahman (the Rahman Legion). Both factions have consistently been attacking Government-held Damascus city with unguided mortars that have killed dozens of civilians, amounting in each instance to the war crime of launching indiscriminate attacks.¹ Other groups present in eastern Ghutah include Ahrar al-Sham, which controls the area of Harasta, and Hay'at Tahrir al-Sham, which maintains control over certain pockets.

7. Infighting between the terrorist group Hay'at Tahrir al-Sham and Faylaq ar-Rahman on one side, and Jaysh al-Islam on the other was rampant in April and May 2016, in April 2017, as well as over July and August 2017. The impact of armed group and terrorist organisation infighting posed grave risks to civilians living under their control. Specifically, civilians were denied freedom of movement within the enclave, which impacted upon their ability to access farmlands. The inability to cultivate land and produce food locally led to an increased reliance on the use of tunnels. Prior to their closing, however, infighting between rebel factions also affected the regularity of tunnel access.

8. In September 2017, Government forces closed the Wafidin crossing point close to Douma, which served as an entry point for goods and which was manned by pro-Government forces on one side and by Jaysh al-Islam on the other. By November, prices for basic commodities surged drastically. One kilogram of sugar now costs between 10,000 and 16,000 Syrian lira. One kilogram of tea costs 100,000, of salt 20,000, of vegetable oil 12,000, and one box of powdered milk between 20,000 and 25,000 lira. Many families in eastern Ghutah currently subsist on \$10 to \$15 USD a day, though the cost of living would require a salary of \$50 to \$100 USD per family per day. While seasonal vegetables remain available, very little red meat or poultry can be found.

9. Just as pro-Government forces markedly heightened aerial and ground operations on eastern Ghutah in September 2017, cases of acute malnutrition become more prominent, with several children having since died of preventable illness such as organ failure exacerbated by malnutrition. The Commission has documented numerous instances in which children suffered immeasurably as a result of malnutrition in eastern Ghutah. Around the same time, women began increasingly experiencing difficulties producing breastmilk due both to malnutrition and stress, further leading to malnutrition of their babies. Many individuals throughout eastern Ghutah are currently subsisting on one meal a day.

10. Siege conditions have further pushed armed actors in eastern Ghutah to loot food and medical supplies from civil society organisations and aid warehouses. Reportedly, on 19 October, at approximately 11 p.m., a group of around 40 armed men wearing balaclavas attacked a Provincial (governorate) Council aid warehouse in Hammourieh. They had spread across the centre of Hammourieh and erected a checkpoint 25 metres away from the warehouse. The armed men broke down the door, stormed the warehouse, and carried stored foodstuffs out and into trucks parked at the entrance. Due to their masks, civilians near the scene were unable to identify any of the armed men. Around one hour after the attack, beleaguered civilians rushed to the warehouse and began taking foodstuffs as well, rendering the warehouse empty of its stocks. On the same evening, another Provincial Council aid warehouse had been attacked by armed men, as well as a third the next

¹ Both factions have consistently been attacking Government-held Damascus city with unguided mortars that have killed dozens of civilians. After the tightening of the siege in February, armed groups began increasingly relying on rockets capable of reaching mid- and long-range areas. For example, on 17 November, a woman was left severely disabled after armed groups launched rockets into Damascus. On 19 November, shortly after 3:00 pm, armed groups located in Jobar or Harasta launched an improvised, 20-metre range rocket from the besieged enclave which struck a crowded city street (Mazza 86) on which two schools are located. One witness recalled hearing the typical "whistle" of the rocket, followed by a large explosion. Three civilians were killed in the attack, and their car destroyed. Minutes later, a similar rocket landed in an open area some dozens of meters away. Similarly, dozens more civilians died on 20 November when armed groups launched attacks against Damascus city. The Abdullah bin Rawaha mosque was reportedly damaged on the same day.

morning. Several similar incidents occurred throughout late October, including in other areas such as Beit Sawa.

11. The United Nations Security Council has issued numerous resolutions calling “on all parties to lift all sieges on populated areas, including in ... Eastern Ghouta” (Res. 2139); expressing deep disturbance “by the continued, arbitrary and unjustified withholding of consent to relief operations and the persistence of conditions that impede the delivery of humanitarian supplies to destinations within Syria, in particular to besieged and hard-to-reach areas” (Res. 2165); and expressing grave concern at the “the use of starvation of civilians as a method of combat, including by the besiegement of populated areas” (Res. 2258). Despite these resolutions, the brutal siege of eastern Ghutah endures.

12. The UN Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura, has further commented that “besiegement belongs in the Middle Ages”.² The siege of eastern Ghutah has been characterised by pervasive war crimes including the use of prohibited weapons, attacks against civilian and protected objects, starvation as a method of warfare leading to severe acute malnutrition, and the routine denial of medical evacuations. Indeed, Government forces routinely deny humanitarian evacuations for wounded and sick civilians and fighters until surrender (truces) and subsequent evacuation, granting it only in rare instances when successful exchanges can be carried out (see A/HRC/36/55, para. 27).

II. Use of prohibited weapons

A. Chemical weapons

13. During the period under review, Government forces continued to use chemical weapons against armed group fighters in eastern Ghutah. After using chlorine against Faylaq ar-Rahman fighters in Ayn Tarma, Zamalka, and Jowbar (Damascus) in early July (see A/HRC/36/55, para. 71), the Commission documented the use of chemical weapons against Ahrar al-Sham fighters in Harasta. In the early morning hours of 18 November, a number of weapons fell on the Harasta frontline. Minutes later, 25 fighters suffered from a combination of symptoms including blurred vision, unconsciousness, contracted pupils, shortness of breath, nasal secretions, vomiting, and headaches. Two other fighters who went to the rescue reported experiencing similar symptoms. Victims were taken to a medical point where their clothes were removed, they were washed with water, and given oxygen, atropine, and pralidoxime. There were no fatalities. Most of the fighters were released from the medical point within 24 hours, though some reported suffering from symptoms up to three days later.

14. The symptoms reported and treatments described are consistent with a small-scale chemical attack involving an organo-phosphorous pesticide. The small number of casualties, the absence of fatalities, and the relatively mild symptomology with quick recovery all suggest that a small dose of chemical agent was released on the Harasta frontline. Some interviewees also reported that it rained shortly after the attack, which would have limited effects farther away.

15. The information available is insufficient to establish the weapons delivery system. Some victims said they did not see the weapon that caused the explosion, which released white smoke, and others said it was caused by an artillery shell. Second-hand information suggesting the agent originated from a hand-grenade, which would be an extremely unlikely delivery system, was denied by victims. While the Commission is unable to establish the delivery system, it notes that the attack follows a pattern of Government forces using chemical weapons against fighters in eastern Ghutah, including in three instances in July, and that there are no documented incidents of armed groups using organo-phosphorous pesticides. Interviewees consistently said they believed the weapon originated from Government forces positions. It is therefore concluded that there are reasonable

² UN NEWS CENTRE, ‘Medieval’ sieges, barrel bombs are ‘disgusting reality’ in Syria — senior UN officials, 23 June 2016, available at www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54308#.Wlu0BK6nHIU.

grounds to believe that Government forces used chemical weapons in Harasta on 18 November.

16. The use of chemical weapons is prohibited under customary international humanitarian law regardless of the presence of a valid military target, including when used against enemy fighters, as the effects of such weapons are designed to cause superfluous injury and unnecessary suffering.

B. Cluster munitions

17. Pro-Government forces further used cluster munitions in densely populated civilian areas on at least three occasions in eastern Ghutah during the period under review, continuing a pattern previously documented in Douma (Rif Damascus),³ Aleppo,⁴ Dayr al-Zawr,⁵ and Idlib.⁶ All three documented incidents took place over the span of four days. Given their typically wide dispersal pattern and high dud rate, which continues to endanger civilians years after a cessation of hostilities, cluster munitions are inherently indiscriminate weapons when used in densely populated civilian areas. In such cases, including the two incidents described below, their use constitutes the war crime of launching indiscriminate attacks in a civilian populated area.

18. At around 7 a.m. on 15 November, residents in Saqba awoke to the sound of explosions, which injured seven persons, including one girl. Approximately half an hour later, another explosion was heard. Eyewitnesses recalled that a few seconds later, a number of smaller bombs exploded. In total, ten persons were injured including two women and four children under the age of 15. Subsequently, on 18 November, at around 3.30 p.m., three weapons struck a residential area in Hammourieh. When rescuers were arriving to the hospital with those injured by the first weapon, a second weapon released numerous bomblets hitting the vicinity of the hospital, which was located in a residential area. One man was killed and at least 25 persons were injured in the second incident, including three children, one of whom received surgery. Images of weapons remnants taken at the scenes of the 15 and 18 November incidents show multiple 3-O-8 rocket assisted mortar cargo canisters and their O-10 submunitions. These are cluster bombs fired from either the M-240 towed mortar or 2S4 Tyulpan self-propelled mortar gun, both of which are systems that Syrian and Russian forces are known to possess.

19. Throughout the afternoon of the following day, on 19 November, Douma was struck by a series of weapons resulting in the killing of six persons, including one child. The weapons impacted residential areas and al-Quwatly street, one of the city's main shopping streets. Of the 143 injured in Douma throughout that day, 25 were women and 26 were children. The victims sustained varying degrees of injuries with 50 requiring hospitalisation. Photos provided by interviewees display typical fragmentation pattern from cluster submunitions on concrete and a parachute for a O-10 cluster submunitions deployed from rocket-assisted 240 mm cluster bombs.

III. Attacks against protected objects

A. Schools

20. Over the span of three weeks, between mid-October and early November, an alarming number of schools and kindergartens were impacted by bombardments in eastern Ghutah. Incidents that occurred in October were caused by ground shelling; in November, schools were hit with air dropped munitions. Fearing further attacks, the majority of schools were closed down, leaving thousands of children deprived of education. While schools may be made the object of attack when used for military purposes, such attacks

³ A/HRC/34/CRP.3, paras. 57 and 59.

⁴ A/HRC/34/CRP.3, para. 54; A/HRC/34/64, paras. 33–35.

⁵ A/HRC/34/CRP.3, para. 58.

⁶ A/HRC/34/CRP.3, para. 56; A/HRC/36/55, para. 65 and annex II, para. 18.

require prior warning when the school is located in a densely populated civilian area, as would be the case for the incidents documented. In none of the following incidents, however, were warnings issued.

21. At around 10.40 a.m. on 16 October, a shell fell in a lane next to the Ghosn Zeitoun school in Kafr Batna. More than 150 children were gearing up to leave the school after attending classes, when an explosion was heard, later identified by interviewees as a shell likely fired from pro-Government forces' positions. A female teacher and her 8-year-old daughter who were leaving school were killed by shrapnel, and the teacher's 5-year-old son sustained injuries to one leg and his hands. Following the incident, the school reduced the number of shifts, operating only from 6 to 9 a.m.

22. On the morning of 31 October, at 10.30 a.m., a shell hit the playground of the Mohammad Nasser Ash'Osh primary school for boys in Jisreen. The school, attended by more than 400 pupils, is located in the centre of Jisreen, surrounded by residential buildings. There is a kindergarten across from the school. As with the incident on 16 October on the Ghosn Zeitoun school, students had just finished classes. The shell killed five boys aged eight to 11 years, and an elderly man who was selling candy close by. At least 26 other boys were injured, as well as one girl in the vicinity. Several of the injuries required immediate surgery, with one boy's feet having been amputated. The school's gate and one wall were destroyed. Following the incident, the school adopted an "emergency" schedule, holding only two classes a day.

23. In one single day, on 8 November, three schools were impacted by airstrikes in eastern Ghutah. The same school complex hosting the Ghosn Zeitoun school, previously hit on 16 October, was struck again though this time by an airstrike. At 1 p.m., an airstrike hit the pavement in front of Basma Amal school, also in Kafr Batna, causing severe damage to the classrooms. Shortly afterwards, at 2.30 p.m., an airstrike hit the Tamayoz kindergarten in Hammourieh. About 240 children attend the kindergarten, which is adjacent to a hospital. There were no casualties among pupils in any of the 8 November incidents, as the Education Directorate instructed all schools to close for security reasons just two days prior.

B. Hospitals

24. Attacks on medical facilities are one of the longest running patterns of violations of the conflict in the Syrian Arab Republic. In besieged areas, hospitals often operate from damaged facilities that have been made the object of repeated attacks over years (see A/HRC/34/64, paras. 30–40), and without the most basic equipment and medication. Hospitals, clinics, and medical points are regularly attacked for attending to the wounded, as part of a strategy to erode the viability of civilian life in opposition-held areas. Attempts to protect the facilities by changing their names or moving underground have often proved unsuccessful (see A/HRC/36/55, paras. 62–66). Hundreds of medical workers have been killed and injured, and countless others have sought refuge abroad. Together, these factors have resulted in a severe weakening of the medical system countrywide, with devastating impact on besieged civilians, particularly vulnerable groups such as children, expectant mothers, the elderly, and those with chronic illnesses. During periods of intense bombardment, such as the one in eastern Ghutah on 8 November, the hundreds of casualties in need of care far exceed the capacity of hospitals to provide it, resulting in inadequate treatment and preventable deaths.

25. On 13 September, at 1.30 p.m., two artillery shells hit Al-Hekma hospital in Kafr Batna, with two more shells landing in its immediate vicinity. Al-Hekma hospital is the main trauma facility of the area. As the hospital had been hit several times in previous years, medical staff stopped using the building's upper floors, which were more frequently impacted in the other attacks. The 13 September attack resulted in four people being injured, among them two patients, including a woman, and one hospital worker. The emergency and recovery rooms were also both damaged, as was hospital furniture including beds, tables, and a solar panel. Medical staff said they believed that the attack was carried

out as reprisal against them for having treated a large number of civilians who were injured in pro-Government forces' bombardments in the days preceding the shelling.

26. Between 14 and 17 November, 84 people were reportedly killed and another 659 injured. On the afternoon of 20 November, when hospitals were overwhelmed with casualties, shells believed to have been launched from pro-Government forces' artillery positions in Al-Maliha impacted the Kafh hospital and its surroundings in Kafr Batna. One shell hit the roof of the hospital damaging water tanks and electrical installations. A second shell hit the front of the hospital's main entrance injuring a hospital worker in the head. Another two shells landed near the hospital, killing a woman and her four children, including two girls, aged between 2 and 11-years-old.

27. In both incidents, interviewees denied the presence of fighters or other military objectives in the hospitals. No warnings were issued prior to the attacks. Hospitals, medical units, and medical personnel are afforded "special protection" under international humanitarian law as a result of their specific humanitarian function, and parties to a conflict must take additional, specific measures prior to targeting such objectives. Throughout the entire Syrian conflict, in no instances has the Commission documented that pro-Government forces ever gave warning prior to attacking hospitals or medical units. Such attacks constitute the war crime of intentionally targeting protected objects.

IV. Medical evacuations

28. Until the initial closures of tunnels in February, only about 80 patients out of 700 estimated to be in need were able to leave eastern Ghutah to obtain treatment in Damascus city. Those who left fell into two categories: one group were patients, such as those in need of open-heart surgeries, who could only obtain treatment in Damascus as it was the only city with the required specialists. The second group were patients, including those requiring dialysis, who could be treated in eastern Ghutah were it not for the fact that siege conditions prevented the required medication and equipment from reaching those in need. In both groups, specific difficulties were faced by men and women. Men under the age of 42 risked being conscripted by Government forces once they reached Damascus city. Further, if a husband left for treatment, life for his wife and children became increasingly difficult. Women and girls in need of medical care faced additional challenges as armed groups in eastern Ghutah only allowed them to travel if accompanied by *mahram* (male guardian). In practice, this meant that a seat for evacuation that could have been taken by another patient was instead used for the *mahram* who did not medically need it.

29. After the complete closure of tunnels in May, all movement of patients was halted, leading to a desperate situation for those sick and wounded. Healthcare practitioners reported that the closure of tunnels led to shortages of medical equipment and medication, which — compounded by malnutrition — exacerbated existing medical conditions for countless civilians.

30. By early October, an estimated 368 patients, including 101 women and 48 children, required urgent medical evacuation. Among them were two girls under the age of three, one requiring heart surgery and the other chemotherapy. Requests for evacuations were submitted to the Syrian Arab Red Crescent (SARC) and followed a heavily bureaucratic process including having to go through the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, and obtaining authorisation by all parties controlling checkpoints along the route patients needed to take. In October, a woman and 14-year-old girl were taken to Damascus for treatment but reportedly only because they were exchanged for a member of Faylaq al-Rahman. Another four patients were reportedly evacuated in October.

31. By December, the number of patients requiring evacuation had risen to 529. In an attempt to assist the gravest cases, 29 patients with severe injuries and chronic diseases were selected for immediate evacuation. While waiting for evacuation, at least two children died, and nine men refused to leave eastern Ghutah because they feared being arrested by Government forces. Their names were replaced with those of other patients. Requests to pro-Government forces for guarantees that patients would not face reprisals went unanswered. Between 26 and 28 December, 29 patients were evacuated to Damascus in

exchange for a number of civilians held by armed groups in Douma (see A/HRC/36/55, paras. 46–48).

V. Conclusion

32. Entering its fifth year, the siege of eastern Ghutah has been marked by increasingly cynical means and methods of warfare, which have led to the worst documented cases of malnutrition over the course of the Syrian conflict. Characterised by pervasive war crimes, including the use of prohibited weapons, attacks against civilian and protected objects, starvation leading to severe acute malnutrition, and the routine denial of medical evacuations, the siege of eastern Ghutah continues to primarily affect the hundreds of thousands of civilians subsisting in the besieged enclave. The Commission has thoroughly documented how all parties to the conflict use siege warfare in order to erode the viability of life under the control of opposing sides, in an attempt to compel surrender (see A/HRC/36/55, para. 18). On the part of armed groups operating in eastern Ghutah, concerted, indiscriminate attacks using unguided mortars continue to kill and injure dozens of civilians in Government-held Damascus city.

Anexo III

Internally displaced persons

1. Beyond civilian casualties and destruction of civilian property wrought by campaigns to combat and ultimately defeat ISIL in Raqqah and Dayr al-Zawr,¹ aerial and ground operations during the period under review triggered one of the single largest waves of internally displaced persons since the inception of the conflict. By June, tens of thousands of Syrian men, women, and children from Raqqah and Dayr al-Zawr began perilous journeys to escape both locales by crossing active frontlines and risking landmines, only to relocate to desert camps administered by the SDF in northern Raqqah and Hasakah governorates. The total number of displaced persons who fled Raqqah and Dayr al-Zawr since July stands at over 319,000 individuals — comprising at least 90,000 from Raqqah, and at least 229,000 from Dayr al-Zawr.

2. Beginning in May, the SDF, Asayish (Kurdish civilian police), and Kurdish military intelligence employed a systematic vetting procedure to assess the threat of all individuals fleeing Raqqah and Dayr al-Zawr for possible connections to ISIL. Tens of thousands of individuals who fled clashes were required to cross checkpoints and register in SDF-controlled camps for vetting, where SDF confiscated every encamped individual's identification documents (national card, family booklet, and/or passport). SDF initially established three emergency transit points where displaced persons transferred through prior to being sent on to larger camps: two are located in southern Hasakah (al-Karama and al-Shadadi camps), and one northwest of Raqqah city (al-Twehna camp).

3. As hostilities increased so too did the rate of internally displaced persons, whereupon four larger, informal camps/managed sites administered by SDF began receiving hundreds of daily new arrivals. These camps currently host approximately 20,000 internally displaced persons in each, totalling at least 80,000 individuals. They are scattered throughout desolate areas in Kurdish-held northern Syria, and located in al-Sad near Arisha, and Mabrouka village (Hasakah), and Ain Issa Cotton Factory and Slouk village (Raqqah).

4. Through the use of road closures, checkpoints, and the requirement of transit permits, SDF created a coercive environment whereby Syrians displaced from Raqqah and Dayr al-Zawr who fled north were left with no choice but to transit through camps, amounting to *de facto* detention from the moment of capture. Many were driven to the camps in pickup trucks by armed SDF, while those able to find and pay smugglers evaded the vetting process. During the reporting period, conditions throughout all camps failed to meet satisfactory conditions of shelter, hygiene, health, safety, and/or nutrition.² SDF soldiers further regularly extorted money from internally displaced persons in exchange for food, water, and for returning their identification documents to leave the camps. Though located primarily in the Syrian desert, the advent of winter has rendered encamped internally displaced persons more vulnerable to exploitation and abuse.

A. Conditions in camps of internally displaced persons

5. Displaced persons in al-Sad, Mabrouka, and Ain Issa Cotton Factory camps frequently reported a lack of even the most basic resources in each, though to varying degree. In al-Sad (Hasakah), some internally displaced persons recalled sleeping on the desert soil upon arrival because no tents were provided to them. Those in need of medical treatment often were not granted medical evacuations to a city hospital in Hasakah unless they could pay SDF camp authorities. One encamped civilian described only witnessing a physician onsite when children required care. At times, access to food was limited to one

¹ See A/HRC/37/72, paras. 36–41 and 50–56.

² Guiding Principles on Internal Displacement, United Nations Economic and Social Council, E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 February 1998 [hereinafter “UN Guiding Principles”], at Introduction 3(c), and Principles 18–19.

loaf of bread per day. Access to water was also limited, with one 20-litre tank distributed per day per family, which had to be rationed for cooking, drinking, and sanitation.

6. On 22 October, civilians in al-Sad camp organised a protest against SDF, hoping their demonstration would allow them to leave. The protest was ultimately quelled after SDF soldiers fired their guns into the air. Ultimately, once vetted, some internally displaced persons were still forced to pay \$100 to exit al-Sad camp. One family was forced to pay \$100 per vehicle to leave, even though the SDF administration lost their identification documents. The same family was unable to depart towards Kurdish-held areas, and was instead diverted by SDF towards northern Idlib. There, displaced for the second time, they were met again by tents in the winter.

7. Equally inadequate living conditions were echoed by civilians in Mabrouka camp, located in Ras al-Ayn countryside (Hasakah). There, internally displaced persons recalled a lack of access to sufficient food, water, and medical care, though tents, mattresses, and blankets were distributed to new arrivals. Additional water had to be purchased, with 20 litres costing over \$9 USD. Some civilians spoke of the water being unpotable and causing diarrhoea in children. One family recalled being given only four cans of sardines upon arrival. In order to cook, they were forced to burn their clothes to maintain fires, while other families lacked the means to purchase prohibitively expensive food sold by SDF soldiers.

8. Mabrouka camp further lacked sanitary latrines, which prompted open defecation and exposure to infectious disease. In numerous instances, no doctors were onsite, and internally displaced persons recalled being placed under the care of paramedics whose medical assistance was limited to dispersing paracetamol. Expectant mothers in Mabrouka were left particularly vulnerable, as the camp lacked specialised maternity care. Only those women who could afford to pay SDF authorities were taken to a nearby hospital to deliver, while those who could not delivered babies on unhygienic campgrounds with the support of other displaced women. As in al-Sad, civilians in Mabrouka camp also organised a protest against deplorable living conditions on 15 December.

9. Some internally displaced persons in Mabrouka explained how SDF targeted certain families for forced conscription, while those who did not have sons were reportedly made to pay \$300 USD to SDF soldiers. Numerous interviewees described Mabrouka camp as being akin to a “prison”, with complete restrictions on movement and no possibility to receive visitors. One encamped civilian, unable to wait out his vetting, paid \$68 USD to an SDF member in order to obtain a “departure permit”, while others paid up to \$100 USD each.

10. Equally inadequate living conditions were reported by civilians who transited through Ain Issa Cotton Factory camp (Raqqah). There, civilians recalled how one loaf of bread was sold to them by SDF members for \$3 USD. Owing to living conditions inside the camp, specific pathologies emerged including diarrhoea and skin disease. On 24 August, the SDF officially admitted to “a very large shortage of medical staff, medicines, and teachers” at Ain Issa.³ On 27 August, the SDF further conceded unsatisfactory living conditions when it announced a fumigation campaign to deal with “the problem of snakes, scorpions, and poisonous desert animals” at the camp, which it noted posed a particularly harmful threat to children.⁴ Women and girls were also particularly affected due to a lack of adequate latrines, with many recalling having waited until dark to relieve themselves in open areas due to fears of assault, humiliation, as well as the cultural sensitivity of using a latrine which was also being used by males.

11. Civilians further lamented the camp’s desolate location by recalling limited mobile network signals, which inhibited their ability to communicate with family. On the rare occasion journalists were admitted to Ain Issa, they were required to interview encamped residents in the presence of an SDF escort.

³ FORCES SYRIA DEMOCRACY, *Ain Issa Camp Under Microscope*, available at www.sdf-press.com/en/2017/08/ain-issa-camp-under-microscope.

⁴ FORCES SYRIA DEMOCRACY, *Insecticide Spraying Campaign Inside Ain Issa Camp*, available at www.sdf-press.com/en/2017/08/insecticide-spraying-campaign-inside-ain-issa-camp.

B. Internment by Syrian Democratic Forces

12. All individuals who fled from Raqqah and Dayr al-Zawr were forced to reside within fenced, camp-like sites in al-Sad, Mabrouka, and Ain Issa while their identification documents were assessed for individual vetting. Families with identifying documents issued by ISIL were disproportionately affected however, as SDF authorities did not recognise these documents as legitimate which led to more prolonged vetting periods. The transit time for vetting procedures averaged between a few days to eight weeks, though internally displaced persons were not made aware any details of the underlying process. Once cleared, only those individuals or families who were able to locate a *kafil* or “guarantor” in Kurdish-held areas were authorised to leave the camps towards those areas. Similar requirements of “guarantors” were imposed for onward movement towards FSA-held Jarablus (northern Aleppo). The desolate locations of camps and confiscation of mobile phones by SDF soldiers in some camps complicated opportunities to secure a “guarantor” for many internally displaced persons. Many others had no choice but to head west towards Idlib, while SDF have forced some families to return to Raqqah and Dayr al-Zawr after landmine clearances.

13. Internment, or administrative detention, for the purposes of vetting civilians believed to pose a security threat may only be justified when absolutely necessary to address “imperative reasons of security”,⁵ and a case-by-case evaluation must take place in relation to every individual prior to detaining him or her. The internment of civilians may not be used solely for interrogation or intelligence gathering. All internees must have been informed promptly, in a language he or she understood, of the reasons for internment, and all had the right to challenge, with the least possible delay, the lawfulness of his or her detention in these camps. The review of lawfulness of internment must be carried out by an independent and impartial body.⁶

14. The threat of ISIL attacks against Kurdish-held areas was exemplified on 3 May, when ISIL militants attacked Rajm as-Salibi camp (Hasakah) just before dawn, killing at least 30 civilians including women and children. Similarly, on 12 October, ISIL militants detonated two vehicle-borne improvised explosive devices at Al-Malha checkpoint in Abu Fas village, bordering Hasakah and Dayr el-Zawr, where approximately 7,000 internally displaced persons were gathered for initial SDF screening. The suicide attack killed 40 internally displaced persons, including women and children, and injured dozens of others. Several suspected ISIL terrorists have since been identified as a result of SDF-run vetting. The SDF is currently detaining nearly 1,400 “terrorist” fighters, primarily ISIL militants identified as such, including hundreds of foreign fighters from up to 30 countries.⁷

15. Irrespective of this threat, the blanket internment of all civilians from Raqqah and Dayr al-Zawr cannot be justified by SDF. Among those civilians currently interned are women, children, elderly, infirm, disabled persons, and others who did not represent an imperative security threat and whose continued detention is manifestly unnecessary on any grounds. In many instances, the on-going internment of these individuals amounts to arbitrary deprivation of liberty, and therefore the unlawful confinement of tens of thousands of individuals.⁸

⁵ The Commission concurs with the International Committee of the Red Cross that “both customary and treaty international humanitarian law contain an inherent power to intern”, and considers “imperative reasons of security” the permissible grounds standard applicable to situations of non-international armed conflict. See, e.g., INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, *Commentary of 2016, Article 3: Conflicts Not of an International Character*, at para. 728, available at www.ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6C DFA490736C1C1257F7D004BA0EC.

⁶ *Ibid.* at para. 723.

⁷ PEOPLE’S DEFENSE UNITS, *2017 Balance Sheet of War — Syrian Democratic Forces*, 3 January 2018, available at www.ypgrojava.org/2017-Balance-Sheet-of-War-%E2%80%93-Syrian-Democratic-Forces, Press Release.

⁸ As Article 3 Common to the Geneva Conventions is silent on the procedural safeguards for persons interned in non-international armed conflict, the Commission applies core human rights obligations to the SDF, an armed group exercising *de facto* control over territory in Syria and who must therefore

16. The *de facto* Kurdish self-administration and SDF moreover sought to rely on humanitarian aid from non-governmental organisations as well as the United Nations to sustain their internment camps. The aid received however continues to be vastly insufficient to support the soaring numbers of internally displaced persons received from Raqqah and Dayr al-Zawr. Notwithstanding the lawfulness of their detention, at all times internees were entitled to conditions of detention which respected their inherent dignity. All internees further had the rights to an adequate standard of living, which includes the rights to food and water, as well as the right to health.⁹ At the very least, the minimum core of these obligations applied irrespective of the economic situation or budgetary considerations of the detaining power, and therefore the SDF could not wholly transfer these obligations onto humanitarian organisations.¹⁰ By failing to provide adequate food, water, and living conditions to any internees, SDF continue to violate these rights in Mabrouka, al-Sad, and Ain Issa camps.

17. The Commission is aware of infirm civilians from al-Sad, Mabrouka, and Ain Issa Cotton Factory camps having been granted medical evacuations only when they paid for them, while SDF actively denied urgent requests for such evacuations in certain instances. In other cases, strict bureaucratic procedures imposed by SDF prevented civilians from being able to medically evacuate when most needed. The failure to provide appropriate medical care or assistance to internees constitutes a violation of the prohibition of cruel, inhuman, or degrading treatment,¹¹ as well as the right to health. Once vetted and cleared, the additional burden of requiring all individuals and families to locate a “guarantor” prior to leaving the camps towards Kurdish and FSA-held areas constitutes a denial of freedom of movement. Finally, SDF soldiers extorting money from individuals prior to allowing them to leave al-Sad and Mabrouka similarly amounts to a denial of freedom of movement.

18. Though the responsibility to provide food, water, and adequate living conditions to persons displaced from Raqqah and Dayr al-Zawr governorates rests with the SDF authorities interning them, humanitarian organisations have played an auxiliary role to ameliorate the sizeable crisis. The presence of local and international humanitarian organisations and the impartial assistance they provide has reduced the harm interned internally displaced persons in the foregoing sites have been exposed to, though such assistance has thus far been insufficient to meet the mounting humanitarian and protection needs of tens of thousands of interned, internally displaced persons at risk.

C. Persons internally displaced from Hamah

19. During the period under review, pro-Government forces renewed offensives in Hamah, steadily attacking remaining opposition-held pockets of the governorate currently under the control of Hay’at Tahrir al-Sham and various armed groups including Faylaq al-Sham and Jaysh al-Izza. Aerial and ground offensives have thus far led to the displacement of tens of thousands of civilians from those areas: since October, hostilities in the north and north-east of Hamah led to the displacement of over 90,000 individuals, particularly those from areas under Hay’at Tahrir al-Sham control. Over 30,000 have been displaced since early November from al-Saan, Hamra, and Oqeirbat sub-districts. Civilians from Oqeirbat — an area comprising 73 villages and located 70 kilometres east of Hamah city — were primarily displaced towards northern Hamah, southern Idlib, and Atarib (Aleppo).

respect the fundamental rights of persons interned in that territory. *See, e.g.*, Report of the Secretary-General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, 31 March 2011, at para. 188, *available at* www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf; International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations, *Treaty Series*, vol. 999, p. 171 [hereinafter “ICCPR”], at art. 9; *see also* UN Guiding Principles, *supra* note 34, at Principle 12(1) and (2).

⁹ *See* United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 13 May 1977, at Rules 24–26.

¹⁰ *See, e.g.*, *Mukong v. Cameroon*, Views, Human Rights Committee, Communication No. 458/1991, 21 July 1994, para. 9.3; *Leroy Lamey et al v. Jamaica*, Decision, IACHR, Case nos. 11.826, 11.843, 11.847, 4 April 2001, para. 203.

¹¹ *Keenan v. the United Kingdom*, Judgment, App. no. 27229/95 (ECtHR, 3 April 2001) para. 111; *Tibi v. Ecuador*, Judgment, IACtHR, 7 September 2004, para. 157; *Huri-Laws v. Nigeria*, Decision, African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication no. 225/1998, para. 41.

20. By mid-July, and with air support, Government ground forces and affiliated militias began advancing from the west towards Oqeirbat. Owing to the heightened intensity and frequency of attacks, many fleeing civilians gathered in Wadi al-Azib (Hamah), a desert terrain near the Salamiyah-Raqqah highway, hoping that evacuations would be facilitated. Instead, those internally displaced ended up trapped with very little food or water as Government forces blocked all roads and laid landmines surrounding both sides of the highway. Up to 10 children perished under severe living conditions in the area, including due to heatstroke, in addition to three elderly persons. By August, civilians unable to subsist in Wadi al-Azib began to risk fleeing at night. Pro-Government snipers targeted fleeing civilians, killing and injuring dozens. On 25 August alone, pro-Government snipers killed at least 70 internally displaced persons. Others were killed in landmine detonations, while up to 25 civilians were arrested by pro-Government forces and have not been heard from since.

21. Oqeirbat is now under Government control, and no civilians remain in the sub-district. Those displaced described how schools, pharmacies, shops, and residential areas were all but destroyed by aerial and ground attacks. Some came to know that pro-Government militias looted their homes, or set fire to them in acts of reprisal. Fearing revenge attacks, civilians displaced from Oqeirbat maintained they would not return to the area even if given the opportunity. On 19 September, armed groups led by Hay'at Tahrir al-Sham launched a large-scale offensive on Government-held areas north of Hamah city, with pro-Government forces' counteroffensives having since killed and injured dozens. On 26 September, in al-Sheikh al-Hilal village, a pro-Government forces ground attack reportedly killed over 60 internally displaced persons, and injured many more. On the night of 12 November, the Syrian Expatriate Medical Centre in al-Jezdaniya, eastern Hamah countryside, was destroyed in an airstrike. While no civilians were affected, an ambulance centre endured severe material damage, and vital medical supplies were damaged. Pro-Government forces continue to deliberately target medical infrastructure as part of a warring strategy, constituting the war crime of intentionally targeting protected objects. Deliberate attacks against ambulances further amount to the war crimes of intentionally attacking medical transport. At the time of writing, fighting in Hamah rages on.

Anexo IV

Erosion of civilian infrastructure

1. Since the inception of the conflict in the Syrian Arab Republic, attacks against civilian and protected objects have been a near constant feature, in violation of international humanitarian law. Places of worship, civil defence centres, homes, bakeries, markets, and to a lesser extent, schools, have regularly been made the object of attack by all warring parties.

A. Hospitals

2. On 19 September, pro-Government forces launched an aerial attack against al-Rahma hospital in Khan Sheikhoun (Idlib), where around 80 patients were being treated. Al-Rahma is a “cave hospital” on the outskirts of Khan Sheikhoun, which was previously attacked on 4 April while treating victims of a sarin attack carried out by Government forces (A/HRC/36/55, annex II, paras. 17). Between approximately 10:00 and 10:15 a.m., two airstrikes were launched; though the first did not cause extensive damage, the second struck the hospital’s entrance, completely destroying an ambulance reception area, as well as three ambulances. The strike also hit the warehouse of the hospital, causing a fire, and damaging vital trauma unit equipment. As jets continued to circulate, rescue efforts were put on hold for a further ten minutes until clear skies could be confirmed. Witnesses recalled noticing an unusual number of flights over Khan Sheikhoun that morning, and therefore evacuated the hospital in anticipation of a possible attack. As such, no casualties were endured. At 3:00 p.m., a primary care clinic in Khan Sheikhoun was also attacked.

3. The walls of al-Rahma cave further cracked due to the force of the blasts. Images and video footage of the aftermath of the attack show widespread bomb damage from blast weapons of varying sizes, including the tail section of an unguided OFAB 100-120 blast bomb, consistent with bombs used by both the Syrian and Russian air forces.

4. On the same day, just before noon, pro-Government forces launched an aerial attack against al-Rahman Charity Hospital, an obstetrics hospital in Tah village (Idlib). Approximately 30 individuals were present at the hospital at the time, including 12 in-patient children receiving treatment and whom their mothers were accompanying. Six babies were in incubators, while an additional 40 patients remained outside receiving clinical services.

5. The first bomb damaged the south-eastern corner of the hospital, which served as a children’s ward, and further destroyed a section for incubators. The second-floor extension to the hospital collapsed, while a pharmacy including medicine stocks were severely damaged. Generators and electricity supplies also sustained severe damage. Outside, one ambulance and two private vehicles were damaged. Photos of remnants indicate that the airstrikes were carried out using multiple blast weapons, and the damage sustained is consistent with unguided OFAB aerial bombs used by both Syrian and Russian forces.

6. Approximately ten minutes before the airstrikes took place, staff at the hospital received warnings of a possible attack from a civilian observatory, and were able to evacuate the vast majority of staff and patients. One female hospital cleaner was immediately killed as a result of the attack, however, and the hospital’s male administrative manager suffered an arm injury.

B. Schools

7. On the night of 20 to 21 March, at approximately 11 p.m., an airstrike hit the Al-Badiya school in Al-Mansoura (Raqqah) killing at least 150 persons. Al-Badiya school, located approximately 1.5 kilometres from the village, was a large, isolated, three-storey building, save for a few houses and tents in the vicinity. The area was controlled by ISIL at

the time. During a briefing of journalists on 28 March, the Combined Joint Task Force (CJTF) of the international coalition took responsibility for the strike noting that it had targeted 30 ISIL fighters using the school, and that it could not corroborate the allegation that internally displaced persons used the school.¹ On 7 July, the Task Force announced that, upon further review of available information, it assessed there was insufficient information to find that civilians the strike harmed civilians.²

8. The Commission initially reported on this incident in July 2017 (see A/HRC/36/55, para. 79). As part of its investigation, it conducted 20 interviews with survivors, relatives of victims, rescuers, village residents, and individuals onsite after the airstrikes. Interviewees all explained that, since 2012, Al-Badiya school housed internally displaced families from Palmyra (Homs), al-Sukhna (Homs), al-Qaryatayn (Homs), al-Khafsa (Aleppo), Maskanah (Aleppo), al-Bab (Aleppo), and Hamah countryside. Some of the residents were recent arrivals while other internally displaced persons had been living in the school for years. More than 200 people were estimated to be living in the school at the time of the airstrike, of which only a few survived. One-hundred and fifty bodies were retrieved from the site though others remained under the rubble as, three days after the airstrike, on 24 March, ISIL prevented rescuers from continuing searches.

9. Of the more than 200 residents at the school, only 12 survivors were identified by the Commission, and several of them sustained serious injuries such as severe burns and the loss of limbs. Survivors reported being blasted through windows during the explosions and landing outside of the school, which saved them from being crushed under the rubble. The vast majority of survivors were women and children, namely four women and six children, the youngest a 10-month-old baby. Interviewees identified the fatalities they knew personally, the majority of them relatives. These included eight women, one of whom was in the final stages of pregnancy, and 21 children, all but one under the age of 11.

10. The school was hit by three airstrikes, each using multiple bombs that destroyed most of the building rendering it uninhabitable. Photos provided by interviewees show evidence of a massive airstrike, and multiple impacts from aerial bombs show delayed fuzing aimed at bringing down the entire building. Photographs of remnants also show fragments of Hellfire missiles, which the Commission has previously documented being used by the international coalition to target survivors of airstrikes (see A/HRC/36/55, para. 57). While many interviewees said that they did not see ISIL members in the school, one survivor who arrived at the school days before the strike said that his family was registered by an ISIL member shortly after moving in, but that the fighter did not reside in the school. Initial information that two families of ISIL fighters had lived in the school but left one month before the strike has not been corroborated (see A/HRC/36/55, para. 79).

11. Information gathered by the Commission does not support the claim that 30 ISIL fighters were in the school at the time of the strike, nor that the school was otherwise being used by ISIL. Rather, the status of casualties and nature of Al-Badiya building is widely divergent from the international coalition's assessment. Information that residents of the school were internally displaced families, including a large number of women and children, and that the school had been used to shelter internally displaced persons since 2012 should have been readily available to the coalition's targeting team. The Commission therefore concludes that the international coalition should have known the nature of the target and failed to take all feasible precautions to avoid or minimize incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects, in violation of international humanitarian law. The subsequent investigation conducted by the international coalition should have been able to identify the high number of civilian casualties resulting from this incident.

¹ News Transcript, Department of Defense Briefing by Gen. Townsend via Telephone from Baghdad, Iraq, 18 March 2017, *available at* www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1133033/departement-of-defense-briefing-by-gen-townsend-via-telephone-from-bagdad-iraq.

² Combined Joint Task Force — Operation Inherent Resolve Monthly Civilian Casualty Report Release No: 17-258 July 7, 2017, *available at* www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1239870/combined-joint-task-force-operation-inherent-resolve-monthly-civilian-casualty.

12. In the latter half of 2017, pro-Government forces began a concerted campaign to decimate schools throughout Aleppo countryside, which were located in a militarily strategic area leading up to Abu al-Duhur airbase (Idlib) and the railway connecting Aleppo and Damascus. On 26 September, at approximately 12:30 p.m., about 15 minutes after all children had been dismissed from classes, pro-Government forces launched a series of airstrikes against Tanatya school in Knater village, Atarib, where nearly 4,000 civilians reside. Up to 11 aerial attacks were carried out over the span of one hour, striking Tanatya school and the surrounding residential area. Tanatya school teaches children in grades 1 to 9 in two buildings, though one was completely damaged as a result of the attack. Students, many of them severely traumatised, have since been relocated to the remaining building.

13. The next day, on 27 September at 2:00 a.m., pro-Government forces carried out an aerial attack against the Baraem al-Thawra school in Batbo village (Aleppo). As an all-girl school, Baraem al-Thawra teaches hundreds of female students in grades 1 to 9. No civilian casualties occurred as the attack took place after midnight. The school included six classrooms, four of which were completely damaged. One individual who went to assess the damage described how a “missile” had entered through the roof and caused a crater two metres in depth. The attack led to the near-complete destruction of the school, rendering it completely out of service. Windows of nearby homes were also shattered by the blasts. A non-governmental organisation and a Free Syrian police station engaging solely in civilian matters are located near the site of Baraem al-Thawra school.

14. On the night of 6 November, at approximately 9 p.m., pro-Government forces attacked the Tel Aldaman secondary school in Monbetah village (Aleppo). Prior to the attack, approximately 200 students, aged six to 16 years, attended the school, which was located on a compound that further comprised a training centre for teachers. Witnesses described how the attack rendered the school and training centre completely out of service, and how this and similar attacks have crippled both students and their families with fear; of the village’s 200,000 original inhabitants, only approximately 10,000 remain. The premises of the school were reportedly attacked again in an airstrike carried out ten days later.

15. Pro-Government forces further carried out at least five separate aerial attacks against three schools in Aleppo in December. On 4 December, in Sumeiryra village, 45 kilometres south of Aleppo city, pro-Government forces attacked the eastern and western schools in Has compound shortly after 9:00 a.m. Images of the aftermath show remnants of an RBK-250 cluster bomb containing sub-munitions. No students were present during the attack, though approximately 30 teachers had gathered to collect their salaries. It is unclear whether pro-Government forces were aware of the presence of civilians at that time, as the announcement for salary collections was transmitted to teachers digitally the day prior. One female teacher and two male teachers sustained minor injuries. The use of cluster munitions in civilian populated areas is inherently indiscriminate (given their typically wide dispersal pattern and high dud rate, which continues to endanger civilians years after a cessation of hostilities), and therefore prohibited by customary international humanitarian law. For this reason, their use by pro-Government forces in Sumeiryra village constitutes the war crime of indiscriminate attacks in a civilian populated area.

16. On 6 and 7 December, pro-Government forces launched an aerial attack on Bayaiya primary school in Tel Aldaman. Airstrikes were carried out at 11:00 p.m., and again shortly after midnight the following day. More than 150 children in grades 1 through 6 attend Bayaiya primary school. The school further hosted an internally displaced husband and wife couple, though neither was injured. The building sustained physical damage, though continues to operate.

17. Similarly, on 9 December, at 9:20 a.m., airstrikes carried out by pro-Government forces hit a private school in al-Hanouteh village (Aleppo). Unlike the foregoing attacks, children were present on the morning of the attack, and a few children were mildly injured as a result. The school was partially damaged, and reportedly attacked again in an airstrike at 3:00 a.m. the following morning.

18. Repeated bombardments, lack of warnings, and the absence of military objectives in and around all schools strongly suggest pro-Government forces intentionally targeted them as part of a strategy to force dissenting communities to leave by rendering their

neighbourhoods uninhabitable, amounting in each instance above to the war crime of intentionally attacking civilian objects.

C. Markets

19. A pattern of attacks affecting crowded market places continued during the reporting period (see A/HRC/28/69, annex II, paras. 2–8, A/HRC/30/48, paras. 34–35, A/HRC/31/68, para. 77). For example, on 13 November, minutes after 2 p.m., a series of airstrikes hit the main market, surroundings houses, and the Free Syrian police station of Atarib (Aleppo). The impacted sites covered an area 250 meters long, with the police station being adjacent to the market. One commercial street was all but flattened by the attack. Based on satellite imagery, an area of approximately 5,000 square meters was damaged or destroyed. The airstrikes killed at least 84 individuals including 6 women and 5 children, and injured around another 150.

20. The population of Atarib, estimated at 30,000 inhabitants in 2011, has grown substantially in recent years as many internally displaced persons from previously besieged areas were forced to leave their homes and settled there. Atarib market, previously hit by airstrikes in April 2014 and July 2016, is itself located in a densely populated area. In addition to shops, restaurants, commercial offices and family homes, two schools operate from a building located 100 meters from the market, where an estimated 450 children were attending classes when the airstrikes were carried out.

21. Being located in western Aleppo governorate, Atarib was part of zone 1 of the de-escalation zones memorandum agreed in May and implemented in September by the three guarantors of the Astana talks, Russia, Iran and Turkey. The main Russian news outlets did not report on the events as they normally do. Yet, on the same day of the strikes, the spokesperson of the Humaymim airbase denied on social media that Russian aircraft committed a massacre in Atarib.³ Humaymim airbase is located in Ladhqiqyah, approximately 160 kilometres from Atarib, and used exclusively by Russian forces. A few hours after the airstrikes, media reports claimed that a meeting between Hay'at Tahrir al-Sham and Nour al-Din al-Zinki took place in Atarib on 13 November.

22. Interviewees, video footage, and photos indicate that it was a clear day. Eyewitnesses saw one aircraft flying at high altitude. In less than ten minutes, the aircraft conducted three waves of airstrikes dropping two weapons in each. Interviewees consistently said that the aircraft remained at high altitude while conducting the strikes and that they received no warning that airstrikes were imminent. On the contrary, interviewees recalled that there had been no airstrikes in Atarib since the de-escalation zones agreement and that they had no reason to believe the town would be targeted.

23. The weapons destroyed the police station and killed at least 13 police officers and six detainees. One survivor who was pulled from the rubble described how the first explosion penetrated the roof of the police station all the way to the ground floor. Some four minutes later another weapon hit the area destroying a three-storey building. A third weapon hit the vicinity of the police station but did not explode. Interviewees denied that the police station was associated with armed factions and maintained it dealt with civilian related matters including acting as traffic police. None of the information gathered suggests that the station was used for military purposes or that any of its officers actively participated in hostilities although some officers carried light weapons. Therefore, the station and the officers remained civilian and were not lawful military objectives.

24. According to local residents and shop owners, the third wave of strikes directly hit a market street killing and maiming civilians and destroying vegetable and clothing shops as well as nearby residential buildings. These accounts are corroborated by video footage and satellite imagery. Shop owners explained that, at the time of the attack, the market was crowded with people who had left work, most of whom were men since many women had stopped going to the market after the earlier attacks. Similarly, as is customary in the country, shopkeepers were mostly male. Due to the high number of casualties, serious cases

³ At the time of writing, this remained the only statement by a Russian official.

were transferred from Atarib hospital to Bab al-Hawa hospital (Idlib). Among the approximately 150 injured were first-responders, including an ambulance driver, who was seriously injured by an airstrike while responding to the first wave of strikes on the police station. The driver died in hospital some days later, his ambulance having been destroyed in the attack. Rescue efforts continued over subsequent days. In some instances, rescuers were unable to identify the deceased because they were internally displaced persons who had moved to Atarib in recent months, including former residents of eastern Aleppo city. In other cases, identification was not possible because only body parts were retrieved.

25. While some interviewees said they only saw one aircraft — with fixed-wings at the back — others recalled seeing a second aircraft they believed to be a reconnaissance aircraft because it circled above the location while the other conducted the strikes. All information available indicates that a Russian fixed-wing aircraft that took off from Humaymim airbase conducted the strikes. Early warning observers monitored the take-off of a fixed-wing aircraft, whose pilots communicated in Russian, from Humaymim airbase at 1:37 p.m. and tracked the aircraft going south and then to the northeast all the way to Atarib where it arrived at 2:07 p.m. No Syrian aircraft were observed in the area in the two hours preceding the airstrikes.

26. As to potential military objectives, many interviewees, including shop owners and local residents, said that due to efforts by the local council, there were no armed groups present in Atarib. Others, however, claimed that — from 9 November onwards — there was on-going infighting between Hay'at Tahrir al-Sham and Nour al-Din al-Zinki in western Aleppo governorate countryside, including in Atarib, Abzemo, and Orum al-Kubra. On 11 November, civilians took to the streets of Orum al-Kubra to protest against the confrontations between the two groups. The protest was violently repressed and three children were shot dead.

27. Some interviewees claimed that there was on-going infighting between Hay'at Tahrir al-Sham and Nour al-Din al-Zinki in western Aleppo governorate. The Commission received conflicting information about a possible target, including unconfirmed reports of a meeting between armed groups and tribal elders. Analysis of the site and other information indicate that a specific location was targeted.

28. Multiple airstrikes in Atarib employed at least two types of aerial bombs — blast weapons and earth penetrators. Images and videos from the site show evidence of at least six impacts. Widespread damage is consistent with blast weapons such as the unguided OFAB-500 causing devastating surface damage that destroyed a large part of the market area. Additionally, at least one bomb carrying multiple smaller earth penetrating munitions caused several impacts collapsing multiple buildings. One entry hole was found containing an unexploded bomblet. Evidence at the scene and video evidence is consistent with a BeTAB-500 unguided “bunker buster” carrying 12 rocket-assisted penetrators. The Russian Air Force has used the BeTAB throughout Aleppo province. The impact points show that unguided bombs roughly fell in a line with a 250 m dispersion which suggests that the aircraft lined up on the target dropping weapons into an area that formed a target box rather than conducting a precision strike against the point target.

29. The likely use of unguided weapons in a densely populated area such as the one hit in Atarib raises the issue of how accurate the weapons were. Circular Error Probable (CEP) is the measure of precision for a guided bomb. It means that 50 per cent of bombs fall within a circle the size of the CEP and 50 per cent outside of it — so a weapon with a 10 m CEP will fall within 10 m half the time and farther than 10 m half the time. When precision weapons miss they usually have close misses. In contrast, unguided bombs do not measure accuracy with CEP. Their accuracy varies greatly depending on a number of factors including aircraft, altitude, speed, heading, training of the pilot, and wind.

30. Unguided bomb accuracy is not officially measured in CEP but military studies have produced estimates of their accuracy using CEP as a rule of thumb. Using visual targeting, CEP is estimated as 122 m at an altitude of 3000 m. As the altitude increases, the accuracy of unguided bombs diminishes greatly. Using an advanced targeting computer, Russian sources estimate that aircraft are able to reliably attain a 25 m CEP with unguided bombs. Even assuming that the Russian estimate that its unguided bombs have a 25 m CEP is

correct, this means that 50 per cent of the weapons would fall within a 25 m CEP and the remaining 50 per cent outside of that. Using such weapons in a densely civilian populated area was certain to impact civilians.

31. All sides in a conflict must distinguish between legitimate military targets on the one hand and civilians and civilian objects on the other and use methods or means of combat that are able to be directed at a specific military objective. There is no evidence to indicate that this attack deliberately targeted civilians or the Atarib market. Through the use of unguided bombs, including blast weapons in a densely civilian populated area, however, this attack may amount to the war crime of launching indiscriminate attacks resulting in death and injury to civilians.
